

Después de la revolución: democratización y cambio social en Centroamérica

CARLOS M. VILAS*

INTRODUCCIÓN

EL CICLO REVOLUCIONARIO QUE SE ABRIÓ en Centroamérica a principios de la década de 1960 bajo el influjo de la Revolución cubana, se está cerrando hoy en las mesas de negociación de El Salvador y Guatemala; en febrero de 1990, los resultados electorales explicitaron la conclusión del régimen sandinista en Nicaragua. ¿Qué saldo arrojan esos procesos? ¿A quiénes beneficiaron? Considerando que los sandinistas alcanzaron el gobierno de su país y después lo perdieron, y que ni el FMLN ni la URNG pudieron alcanzar por la vía de las armas el poder político del estado en sus países respectivos: ¿valieron la pena tanto sufrimiento y tantos sacrificios?

La última pregunta puede conducir a una perspectiva sesgada: se “elige” la vía revolucionaria o armada, como podría elegirse la vía electoral u otra. Por lo tanto, la opción revolucionaria, sobre todo la opción por una estrategia político-militar, testimonia en definitiva el autoritarismo de quienes la prefieren. Naturalmente, las cosas no son así: la “opción” revolucionaria es usualmente el resultado del estrecho margen de posibilidades de que dispone una propuesta de transformación política y social más o menos amplia en sistemas políticos que proscriben legal o factualmente la participación de los grupos sociales económicamente subordinados y el desarrollo de proyectos de reforma social. Es, usualmente, una “opción” forzada cuando los otros caminos se cierran.

Aun con esta necesaria precisión, es válido preguntarse quiénes ganaron y quiénes perdieron, y cuánto costó lo que se ganó y lo que se perdió en Centroamérica después de más de dos décadas de revolución, guerra y crisis. La cuestión no es sencilla. Es difícil discernir qué efectos fueron generados precisamente por la acción de las fuerzas revolucionarias y no por otros factores. Este trabajo asume que el ciclo revolucionario que hoy concluye fue resultado de una compleja causación recíproca de elementos y protagonistas, de acciones y reacciones. Por lo tanto, la valoración de sus resultados debe tomar en consideración

* Agradezco a Raúl Benítez Manaut los comentarios a una versión anterior de este documento. Las limitaciones que seguramente subsisten son de mi exclusiva responsabilidad.

esa reciprocidad. La presencia de una opción de cambio revolucionario fue importante por sí misma, pero también por las reacciones y contraestrategias que motivó en los grupos beneficiarios del *statu quo* —*statu quo* que, por eso mismo, empezó a dejar de serlo.

Además de una década de revolución y contrarrevolución, la de 1980 fue la “década perdida” para el desarrollo latinoamericano, circunstancia a la que debe prestarse atención en el momento de hacer las cuentas de la economía centroamericana. La recesión de la década de 1980 en todo el istmo fue independiente de las ideologías y de políticas locales; lo mismo puede decirse de la llamada crisis de la deuda. El segundo choque petrolero en 1979-80, el crecimiento de las tasas de interés de la deuda externa y la caída de los precios de la mayoría de los exportables, tres acontecimientos sobre los que las economías centroamericanas carecen de control, golpearon a la región y dificultaron el diseño y la ejecución de políticas flexibles y eficaces. Recíprocamente, algunos efectos del conflicto revolucionario y de la guerra contrarrevolucionaria —por ejemplo, la desarticulación de los mecanismos de intercambio regional— afectaron a las cinco economías, independientemente de las definiciones ideológicas o de las bases sociales de sus gobiernos.

Este artículo intenta aportar algunos elementos a esas respuestas. No es, ni pretende serlo, un balance de los intentos revolucionarios en Centroamérica.¹ No es sencillo formular proposiciones que aspiren a ser significativas para los tres países que atravesaron por experiencias revolucionarias. El inicio de la insurgencia data de la década de 1960 en Nicaragua y Guatemala, mientras que en El Salvador las guerrillas son posteriores a 1972; las diferencias de fechas expresan diferente gravitación de los factores que alimentaron cada proceso. La desembocadura actual de esas experiencias es también diferente. Por lo tanto, el objetivo central de este trabajo consiste en discutir algunos aspectos de los intentos revolucionarios referidos a la construcción de un sistema político participativo, democrático y popular; de un régimen social más equitativo, y del saldo que surge de ellos.

1. FACTORES DETONANTES DE LOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS

Los procesos revolucionarios centroamericanos fueron el producto combinado del carácter marginador y desigual del acelerado desarrollo capitalista experimentado desde la década de 1950, y del autoritarismo que le sirvió como marco político.

Entre 1950 y 1980, el PIB centroamericano creció a una tasa media anual de 4.9%, y de 6% como promedio anual durante el decenio de 1960. Pocos países de América Latina experimentaron durante un período tan largo un ritmo tan alto y sostenido de crecimiento. En consecuencia, en 1980 el PIB centroamericano por habitante era casi 67% más alto, en valores reales, que el de 1950, pese a que entre

¹ Por Centroamérica se hace referencia aquí a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

1960 y 1980 la población de la región se duplicó. En el mismo período, la economía centroamericana se diversificó a partir de un fuerte impulso agroexportador.

El auge económico estuvo acompañado por un proceso rápido e intenso de desposesión campesina y progresiva proletarización de la fuerza de trabajo, incremento de la pobreza urbana y reforzamiento de la concentración de los ingresos. En una síntesis simplificada de una situación compleja, puede señalarse que en 1980, 64% de la población centroamericana vivía debajo de la línea de pobreza, y el 42% se encontraba en situación de pobreza extrema. En el campo, las cifras eran, respectivamente, 76% y 56%. En esa misma época, el ingreso medio por habitante del 20% más pobre de la población era de 90 dólares al año, y el del 20% más rico, de 1 330 dólares. Entre 1970 y 1980, el 20% más rico de la población de Guatemala aumentó su captación del ingreso de 48.5% a 56%, mientras el 50% más pobre redujo su participación de 22% a 17.8% (IICA/FLACSO, 1991:118, 121, 123; Vilas, 1989a:20). Uno de los procesos de crecimiento capitalista más sostenidos de toda la postguerra generó una de las situaciones más generalizadas y agudas de empobrecimiento. No fue por lo tanto el fracaso del desarrollo capitalista, sino su éxito, el ingrediente socioeconómico de los procesos revolucionarios.

En tres de las sociedades de la región —Nicaragua, Guatemala y El Salvador— este proceso de acumulación/empobrecimiento estuvo enmarcado políticamente por dictaduras que combinaron el fraude electoral sistemático con la represión abierta. La diferencia específica del auge capitalista centroamericano entre estos tres países y los otros dos fue su escenario político más que sus efectos sociales. La falta de un espacio de legitimidad para las demandas sociales y políticas de las clases y grupos afectados negativamente por la expansión capitalista, más que la expansión capitalista misma, es lo que explica que se hayan desarrollado procesos revolucionarios en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, y no en Costa Rica y Honduras, pese a que en estos dos países la magnitud y el sentido del cambio económico no fueron cualitativamente diferentes a los de los otros tres (Vilas, 1989b).

En Nicaragua, la dictadura de la familia Somoza, transmitida de padre a hijos, constituyó el formato institucional de la modernización capitalista, cuyos frutos fueron monopolizados por la camarilla gobernante. El empobrecimiento de las masas y el desajuste generalizado de sus condiciones de vida se combinaron con el resentimiento y la frustración de buena parte de la burguesía nicaragüense, marginada de las oportunidades de inversión por lo que se dio en llamar la “competencia desleal” del somocismo. En Guatemala, el auge capitalista agroexportador abarcó todo el período posterior a la contrarrevolución de 1954 y combinó regímenes militares intensamente represivos en las décadas de 1950 y 1960, elecciones con candidatos militares en la década de 1970, y dictaduras militares genocidas a principios de los ochenta. En El Salvador, la continuidad de los gobiernos militares desde la matanza campesina de 1932 se vio enfrentada, desde los sesenta, a desafíos provenientes de las demandas de democratización de los grupos emergentes de las clases medias y del movimiento sindical urbano. El fraude electoral de 1972, que despojó de la victoria electoral a una coalición reformista

democrisiana/socialdemócrata, y los posteriores incremento y masificación de la represión, demostraron a buena parte de los actores políticos que el espacio de la política institucional se cerraba para cualquier propuesta de reforma. El intento fallido de “transformación agraria” en 1976, la reiteración del fraude electoral en 1977, la frustración reformista del golpe cívico-militar de 1979, abonaron en muchos sectores de la población el escepticismo respecto de la capacidad del sistema institucional para aceptar transformaciones políticas y sociales de signo progresista (Montes, 1988:38-39). En tales condiciones, para muchos activistas del cambio social y la democratización resultó más fácil, y sin duda más seguro, volverse clandestinos o subir al monte que insistir en arriesgar la vida en una estrategia institucional sin eficacia visible.

Desde inicios del decenio de 1960, y como una reacción frente a lo que estimaba como una amenaza de la Revolución cubana, el gobierno de Estados Unidos inició una política de apoyo militar y de seguridad para los regímenes dictatoriales o fraudulentos de esos tres países. Antes incluso de que surgieran amenazas insurgentes reales a tales regímenes, varias agencias gubernamentales estadounidenses decidieron tomar partido por su preservación, consolidando por lo tanto el poder de los grupos sociales a los que tales dictaduras servían o expresaban. En el curso de pocos años se pasó de la evolución pacífica predicada por la Alianza para el Progreso, a la contrarrevolución preventiva y a una temprana militarización de los estados. El equipamiento y entrenamiento de los cuerpos militares y de seguridad, y la creación de nuevos servicios de inteligencia, orientados todos a la preservación del orden político y social fueron los objetivos prioritarios de la asistencia de Estados Unidos a los regímenes de la región. Ya en 1963 el entonces secretario de Defensa Robert MacNamara enunció la doctrina según la cual la tarea fundamental de los oficiales latinoamericanos entrenados en las academias especiales de la Zona del Canal y de Estados Unidos era la seguridad interna de sus estados. El resultado de esto fue la creación de lo que, posteriormente, algunos observadores llamarían “estado contrainsurgente” (Jonas, 1991:116-123), pero un estado contrainsurgente que cobró existencia antes de que el enemigo al que combatía hubiera dado muestras de actividad significativa.²

Ante todo, este panorama contrasta con los de Costa Rica y Honduras. En el primer país, tras los acontecimientos de 1948 fue eliminado el ejército—instrumento político tradicional de los grupos dominantes en Centroamérica— y una estrategia de reformas sociales y de progresiva democratización que se combinó con la ilegalización del partido Vanguardia Popular (comunista), ayudó a moderar el efecto socialmente nocivo de la acumulación capitalista y generó un espacio de legitimidad política para la protesta social. En el período 1974-78, por ejemplo, se registró un aumento de la movilización campesina y de las ocupaciones de tierra; mientras que en la vecina Nicaragua la dictadura somocista respondía, ante

² Según LaFeber (1984:176), el entonces embajador norteamericano en El Salvador se quejó ante el Departamento de Estado de que en 1963 y 1964 había más oficiales de la fuerza aérea de Estados Unidos asignados a la misión militar de la embajada, que aviadores en toda la fuerza aérea salvadoreña. *Vid.* también McClintock, 1985.

acontecimientos similares, con la represión, el gobierno de Costa Rica impulsó un proceso de expropiación con compensación a los propietarios afectados, y de titulación en beneficio de los ocupantes. En Honduras, el reformismo militar de la década de 1970, inspirado en el régimen peruano del general Velasco Alvarado, arbitró en las tensiones sociales y promovió una reforma agraria parcial que por lo menos contribuyó a aplacar las demandas agrarias y a dotar de cierta estabilidad al régimen político.

Por otro lado, la simbiosis capitalismo/dictadura/represión/fraude electoral, explica que los movimientos revolucionarios que cobraron desarrollo en el primer grupo de países plantearan un conjunto amplio de reivindicaciones que apuntaban a un objetivo doble: *democratización y cambio social*. Algunas organizaciones explicitaron, desde el inicio, un enfoque socialista de la lucha a la que convocaban al pueblo; otras se ubicaron en una perspectiva de liberación nacional. Pero en todos los casos la propuesta revolucionaria combinó demandas de democratización y de transformación socioeconómica. En la medida en que los regímenes contra los cuales se dirigía la iniciativa revolucionaria eran apoyados por el gobierno de Estados Unidos —y algunos eran producto de la intervención armada estadounidense, como la dictadura de Somoza y el sistema político de Guatemala posterior a 1954— y expresaban modalidades de alianza entre los grupos dominantes locales y los intereses de Estados Unidos en la región, el *antiimperialismo* fue el tercero de los ingredientes centrales de la propuesta revolucionaria en Centroamérica.

Finalmente, esta articulación de democratización, cambio social y soberanía nacional permitió que la convocatoria revolucionaria echara raíces en un arco relativamente amplio de clases y grupos sociales. A fines del decenio de 1970 no sólo los guerrilleros, sino también un vasto y variado espectro de actores sociales y políticos, incluyendo a algunos miembros de la comunidad de negocios, consideraba que había llegado la hora de cambiar las cosas en Centroamérica. Sin embargo la fractura del bloque dominante fue más profunda en Nicaragua que en Guatemala y El Salvador. La “competencia desleal” de Somoza antagonizó a importantes segmentos de la burguesía, contribuyendo junto con otros factores a que, en determinado momento, éstos aceptaran la estrategia sandinista de derrocamiento de la dictadura. El sentido clasista de la lucha dictatorial estuvo así mucho más diluido que en Guatemala y en El Salvador, donde el autoritarismo supo mantener unido al conjunto de los grupos dominantes, dotando a los embates revolucionarios de un perfil social más definido.

2. ¿QUÉ QUEDA, DESPUÉS DE TODO?

Cuando un proceso revolucionario triunfa políticamente, cualquier costo se compensa. Sobre todo en los momentos inmediatamente posteriores al derrocamiento del régimen opresor, el entusiasmo de la victoria otorga sentido a los tragos amargos del pasado. La evidencia del éxito alcanzado justifica, en el imaginario popular y en el discurso del nuevo oficialismo, los sacrificios realizados.

Pero frente al fracaso, o la derrota, los juicios tienden a ser implacables. La posibilidad de un análisis balanceado se hace muy difícil. La contundencia del resultado negativo descalifica cualquier argumento en favor de las intenciones originales y de los factores que intervienen posteriormente, y de hecho tiende a convertir en argumentación justificatoria, o en empecinamiento irracional, cualquier intento de análisis objetivo.

Ahora bien: ¿triunfó o fracasó la revolución en Centroamérica? La respuesta más fácil hoy es que la revolución fracasó: no pudo alcanzar el gobierno en El Salvador ni en Guatemala, y en Nicaragua tardó menos en perderlo que en conquistarlo. Éste es el tipo de respuesta que se encuentra en la prensa internacional y en los círculos próximos a los actuales gobiernos centroamericanos. Es innegable que encierra un cierto mensaje aleccionador: puesto que la estrategia revolucionaria fracasó, y los que siempre gobernaron Centroamérica siguen gobernándola, no tiene sentido volver a intentar en el futuro algo tan descabellado. Además, Nicaragua, Guatemala y El Salvador emergen de una década de guerra con sus economías destrozadas, en el marco de una crisis que descarga su peso, sobre todo, en los grupos sociales que se dejaron ilusionar por los revolucionarios. ¿Ven lo que consiguieron?

“Lo que consiguieron” está a la vista. En El Salvador se estima que las víctimas de la guerra suman 70 000 personas; en Nicaragua se calculan casi 58 000; sobre Guatemala, donde la violencia es de más larga data, no hay todavía cifras confiables, pero las estimaciones para el período 1980-85 rondan los 50 000 muertos (Dunkerley, 1988:496; INEC, 1989: cuadros V.1 y V.2; Lake, 1990). También es difícil cuantificar la cifra de mutilados de guerra, pero todo el que camine hoy por las calles de cualquier pueblo o ciudad de Nicaragua puede aproximarse a la magnitud del espanto. Es similarmente complejo dimensionar el efecto de la violencia en la infancia centroamericana: se refiere tanto a los efectos directos de las acciones bélicas —bombardeos, emboscadas, muerte de familiares y de otros niños, heridas y mutilaciones—, como a los desplazamientos forzados, a la interiorización del miedo y de la racionalidad de las conductas violentas, etcétera (Moreno, Martín, 1991; Amnistía Internacional, 1990).

Centenares de miles de personas fueron desplazadas de los lugares en que vivían y gran parte de ellas buscó refugio en otros países: entre 11 y 13% de la población total de Centroamérica estaba, a finales de la década de 1980, en condiciones de refugiada o desplazada —es decir, alrededor de 1 800 000 personas (IICA/FLACSO, 1991:204). La vida en los campamentos de refugiados y en los reasentamientos fue precaria, para decir lo menos: carencias materiales, amenazas de represión, abusos de las autoridades. Las condiciones para el retorno a sus lugares de origen son difíciles, y dependen en gran medida de la cooperación internacional. Gente que hace diez años contaba con una parcelita de tierra, o con un empleo, vive hoy de la caridad externa. A través de un camino signado por el horror, transitaron de la explotación a la marginalidad.³

³ Vid. por ejemplo Edwards y Tovar, 1991.

La combinación de guerra social y crisis deterioró seriamente las economías, en un contexto más amplio de profundo deterioro de la economía latinoamericana en su conjunto. En toda Centroamérica, el PIB por habitante cayó, en el decenio de 1980, en un 17%, pero en Guatemala disminuyó 18%, en El Salvador 15%, y en Nicaragua casi 41% (CEPAL, 1990a, cuadro 3). Es difícil separar cuánto de la caída se debió a la guerra y cuánto a la crisis. Honduras y Costa Rica no experimentaron la primera, pero su PIB por habitante se redujo 14% y 5% respectivamente. En todo caso, la guerra social contribuyó al deterioro de la infraestructura, a la desarticulación de la producción, a la ruptura de los mercados de trabajo, a la distorsión de las políticas. Solamente en Nicaragua se calcula que los costos de la guerra sumaron 226 millones de dólares en daños físicos, y 1 194 millones en pérdidas de producción; el costo total de la guerra ha sido cifrado en casi 18 000 millones de dólares para un país cuyo PIB sumaba, a fines de la década de 1980, entre 1 200 y 1 400 millones de dólares (INEC, 1989, cuadro V.2). Se dejó de trabajar, de estudiar, de investigar, de producir, de exportar. En Guatemala, el desempleo abierto creció de alrededor del 3% de la PEA a principios de la década de 1980, a casi 13% a finales de la misma; en El Salvador, de 16% a más de 25%; en Nicaragua, de 18% a casi 30%, pero a principios de 1992 la subutilización total de la fuerza de trabajo (desempleo abierto más subempleo) se estima en dos tercios de la PEA y en algunas regiones, como la Costa Atlántica, en 90%.⁴ Hoy medimos el desempleo y el subempleo mejor que hace diez años, pero el crecimiento de las cifras, que de todos modos reflejan pálidamente la realidad, se debe tanto al mejoramiento de las estadísticas como al empeoramiento de la vida.

Aplicando una lógica similar a la de la respuesta anterior, podríamos decir, que todo esto es consecuencia de la resistencia de los grupos dominantes al cambio social, de su empecinamiento en mantener sus privilegios sociales, de su compromiso con el autoritarismo. Si los grupos dominantes hubieran sido menos trogloditas, las cosas habrían sido distintas. Ante el fracaso de las iniciativas de reforma institucional y participación electoral de la democracia cristiana, la socialdemocracia y otras tendencias progresistas en las décadas de 1960 y 1970, mucha gente consideró que no quedaba más remedio que aceptar la convocatoria revolucionaria, y apelar a las vías directas de acción o colaborar con ellas, para apostar al éxito político y a un mínimo de bienestar.

¿Fue errónea esa decisión? ¿Debieron haber seguido soportando miseria y explotación, represión y escarnio? ¿Aceptando como inevitable el fraude electoral y la arbitrariedad? Estas interrogantes llevan mucho más allá de la geografía centroamericana y apuntan al debate siempre abierto en torno al derecho de resistencia a la opresión. Cuando las vías legales se cierran: ¿hay que resignarse? ¿Vamos a descalificar las luchas contra el *apartheid* por el enorme costo en vidas humanas que ha demandado del pueblo negro, o levantaremos cada una de esas muertes como otros tantos argumentos contra los beneficiarios del racismo? ¿Debemos

⁴ IICA/FLACSO, 1991:213 y 153. Las estimaciones para 1992 en Nicaragua fueron presentadas a la Asamblea Nacional de ese país por el representante William Ramírez (sesión del 1 de abril 1992); *vid.* también Aguilar y Renzi, 1992.

abjurar de los que consiguieron la independencia de nuestros países, porque las guerras que la hicieron posible desarticulaban las economías, y porque en ellas murieron muchos patriotas, o serán éstos otros tantos argumentos contra el colonialismo? ¿De qué lado del conflicto de 1810 se habrían colocado los partidarios contemporáneos del *body count*? En 1970, la mayoría del pueblo chileno optó por una estrategia de cambio institucional: la respuesta de los grupos dominantes y del gobierno de Estados Unidos fue la dictadura de Augusto Pinochet. Concediendo que en el descalabro de la economía chilena haya incidido, como se argumenta, el efecto de algunas políticas gubernamentales, y no sólo —como este autor considera— la desestabilización intencional de la burguesía y de agencias del gobierno de Estados Unidos: ¿es razón suficiente ese descalabro para justificar o disculpar el baño de sangre que impuso el régimen militar subsiguiente?

¿Quién puede asegurar que si el pueblo nicaragüense hubiera aceptado la dictadura de Somoza o el regreso victorioso de los contras, que si guatemaltecos y salvadoreños se hubieran resignado a la represión, la explotación y el fraude, hoy se encontrarían mejor? ¿Seríamos tan benevolentes con la revolución de 1948 en Costa Rica si hubiera sido derrotada?

Como todo proyecto de revolución social, el centroamericano apuntaba a tomar el gobierno para democratizar el poder político, a cambiar las relaciones socioeconómicas mejorando el acceso de los trabajadores a los recursos —tierra, empleo, comida, educación, salud—, a consolidar la soberanía nacional. La valoración de tal proyecto no debería reducirse, por lo tanto, a la cuestión del gobierno, o del estado —si bien ésta es una de las dimensiones básicas del cambio revolucionario. La propia movilización revolucionaria, aun cuando no culminó con la toma del poder político por los revolucionarios guatemaltecos y salvadoreños, abrió un espacio para las transformaciones sociales y para el surgimiento de nuevos actores, que de todos modos han contribuido a modificar algunas dimensiones de las sociedades respectivas. De manera inversa, muchas reversiones del proyecto revolucionario sandinista tuvieron lugar mientras el sandinismo era gobierno.

Sin embargo, si los cambios experimentados en la sociedad son más visibles en Nicaragua que en El Salvador y Guatemala, ello se debe en medida no irrelevante a que fueron el resultado de políticas estatales diseñadas para generarlos, y no el efecto de decisiones destinadas a prevenir transformaciones más profundas impulsadas por los propios actores emergentes. Sin perjuicio de los juicios que la experiencia merece, en Nicaragua el proyecto revolucionario fue gobierno, y ello dotó de mayor solidez a muchas de las transformaciones de la sociedad.

El efecto de la movilización social: los “nuevos sujetos”

El auge revolucionario del decenio de 1980 auspició una intensa y amplia activación de grupos sociales que en las décadas anteriores carecían de una identidad propia, o se expresaban de manera subordinada a otros protagonistas de la acción colectiva: mujeres, indígenas, pobladores de barrios precarios, grupos religiosos. Un amplio conjunto de actores a quienes la bibliografía tendió a presentar como “nuevos sujetos” sociales. Lo novedoso en realidad no eran los sujetos

—muchos de los cuales, como los indios y las mujeres, siempre habían estado presentes, al menos como realidad demográfica— sino su capacidad para expresarse de manera tendencialmente autónoma y para imprimir sus propias perspectivas y demandas en los procesos globales. La década de 1980 enmarcó así el decidido avance de las organizaciones y movimientos de mujeres, de las reivindicaciones étnicas, de las organizaciones religiosas de base, de los movimientos de pobladores, de las organizaciones en defensa de los derechos humanos, etcétera. Fue una gigantesca activación de una sociedad civil que hasta entonces se había caracterizado por la fragmentación y una aparente pasividad. El desarrollo de la literatura de testimonio, la poesía popular y la nueva narrativa dio resonancia universal a este florecimiento, traumático y convulsivo, de la sociedad centroamericana.⁵

La relación de las expresiones nuevas de la inconformidad social con las organizaciones revolucionarias abarca desde la subordinación hasta el antagonismo, pasando por diversos grados de autonomía y coordinación. En Nicaragua, tanto en la etapa de la lucha antidictatorial como, sobre todo, durante el gobierno sandinista, las nuevas organizaciones sociales y sindicales de la región central y del Pacífico tendieron a aceptar una subordinación estratégica y operativa al Frente Sandinista y al Estado, mientras que los grupos étnicos de la Costa Atlántica entraron en rápido y violento antagonismo con el régimen revolucionario. En Guatemala y El Salvador, en cambio, la autonomía relativa entre organizaciones sociales y organizaciones político-militares parece haber tenido mayor espacio, sobre todo en la segunda mitad de la década (Lungo, 1989; Vilas, 1990a). El clima insurreccional alentó esas nuevas efervescencias, y éstas echaron más leña al fuego de la revolución.

Con eficacia desigual, este variado arco de actores y organizaciones amplió la agenda de los proyectos de transformación social y democratización, desde una perspectiva predominante de clase a una de mayor pluralismo y de explícita incorporación de las problemáticas del género, la etnicidad, la cultura, etcétera. La lucha para dotar de legitimidad, dentro del proyecto revolucionario, a esas demandas “nuevas”, no fue sencilla, y el cierre del ciclo revolucionario no ha significado que ésta haya concluido. La articulación inicial de muchas de estas organizaciones a la estrategia revolucionaria las expuso a los efectos de la represión. Hoy, el escenario postbélico y la reorientación de la acción de las organizaciones revolucionarias definen nuevas condiciones de actividad para los movimientos de mujeres, de indios, de pobladores. La desaparición del clima bélico favorece la democratización interna, amplía las posibilidades de debate, fortalece las aspiraciones a la autonomía operativa.⁶

La verdadera invasión de organismos no gubernamentales europeos y de América del Norte que la región experimentó durante la década fue importante

⁵ Sobre las mujeres, *vid.* García y Gomáriz, 1989; sobre la activación étnica, Adams, 1991 y Vilas, 1989c; sobre los movimientos cristianos, Berryman, 1984. Sobre la activación cultural y artística, Beverley y Zimmerman, 1990.

⁶ *Vid.* por ejemplo La Ramée y Polakoff, 1990 sobre pobladores y organizaciones de barrio; CAICA, 1991 sobre los grupos de cristianos de base; Olivera y Fernández, 1992 sobre mujeres.

en la apertura del debate a estos nuevos temas entre las fuerzas que postulaban el cambio revolucionario. En algunos casos, la dotación de recursos materiales y financieros con que las nuevas perspectivas venían acompañadas contribuyó a la aceptación tanto de las mismas como de su valor intrínseco; en otros, los sesgos derivados de un trasplante directo desde el norte desarrollado e industrial a las sociedades agrarias empobrecidas y distorsionadas de Centroamérica actuó para que algunas temáticas, como las referidas a las identidades étnicas o a la subordinación de género, suscitaran tensiones y conflictos que demoraron su efectiva implantación en las masas —escollos similares a los que, décadas antes, experimentaron los primeros intentos de aplicar un análisis de clase a sociedades con un capitalismo muy incipiente.

La situación actual de esas nuevas expresiones de la activación social es desigual. El involucramiento de las jerarquías eclesiásticas católicas de Guatemala y El Salvador en los procesos respectivos de diálogo y paz y en la defensa de los derechos humanos ha permitido a las comunidades cristianas de base mantener cierta actividad, a pesar de la represión que se ejerció sobre ellas; en Nicaragua en cambio, las públicas simpatías de la jerarquía con el gobierno de la UNO y el no menos conocido enfrentamiento con el FSLN han colocado a la “iglesia popular” en situación difícil. Durante la década de 1980, muchas de las comunidades de base aceptaron en los hechos una subordinación política respecto del gobierno sandinista y una progresiva abdicación de autonomía que hoy las deja sin protección frente al comportamiento ambiguo del FSLN respecto del gobierno de Nicaragua, y ante la agresividad de la jerarquía eclesiástica. El efecto combinado de estos factores es una fuerte reducción en el nivel y los alcances de actividad y en la membresía, y el fortalecimiento de su dependencia respecto de las agencias externas que cooperan con ellas (Aragón y Lösche, 1991).

La situación de los grupos religiosos protestantes es distinta. Es sabido que en Guatemala la política de contrainsurgencia de principios de la década de 1980 se articuló con la acción de algunas denominaciones evangélicas (Samandú, 1991; Stoll, 1991), del mismo modo en que el gobierno de ARENA parece haber estimulado su acción entre la población pobre de San Salvador que llegaba huyendo de la violencia rural (Montes, 1988). Los desplazamientos motivados directa o indirectamente por la contrainsurgencia y la guerra, y el clima de represión política, fracturaron los vínculos tradicionales de organización y unidad de las poblaciones de las aldeas y los suburbios de las ciudades. Sin perjuicio de su instrumentación por los regímenes contrarrevolucionarios, y del consiguiente estímulo —y protección— oficial, los grupos evangélicos ofrecieron un tipo de religiosidad fundamentalista y espiritualista que apelaba a la conversión individual y a actitudes intimistas y pasivas, en fuerte contraste con las apelaciones al compromiso activo, a veces radical, siempre colectivo, de las comunidades de base y la teología de la liberación. Si los grupos radicalizados del catolicismo social movilizaban a sus fieles en nombre del “pecado de estructuras” —es decir, la injusticia social, causa de la maldad entre los hombres y en los hombres (y mujeres)— el evangelismo volvió a colocar el pecado dentro de cada individuo, absolviendo sin dudas a la sociedad

y a quienes la dirigen, pero también dotando de mayor seguridad personal a las prácticas religiosas en cuanto eliminaba, o restringía, sus proyecciones sociales.

Los movimientos de mujeres también experimentan las alzas y bajas de cada situación nacional. En Guatemala, el mantenimiento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos prolonga la primacía del tema de los desaparecidos y formas relacionadas de represión, en los que organizaciones como el GAM (Grupo de Ayuda Mutua) ha adquirido justa notoriedad. La problemática de la subordinación de género y de las múltiples expresiones del sexismo como manifestación específica de la opresión social ocupa todavía un espacio menor y moviliza sobre todo a mujeres urbanas y de grupos profesionales; el pluralismo étnico de la sociedad hace además que la cuestión de género deba articularse con la cuestión de la diversidad étnica —un proceso que aún se encuentra en incipiente gestación. En El Salvador las mujeres han desarrollado una intensa actividad frente a la represión en los campamentos de refugiados y en los movimientos de reasentamiento y repatriación (Thomson, 1990). El modo en que finalmente se resuelva la cuestión de la depuración de las fuerzas armadas y de seguridad, y el enjuiciamiento a los responsables de violaciones a los derechos humanos incidirán en el desenvolvimiento ulterior de las organizaciones de mujeres ligadas a este tema. El arribo a una paz negociada, sin definición clara del conflicto, puede colocar a las organizaciones de mujeres vinculadas a la cuestión de los presos desaparecidos en una situación similar a la del movimiento de las “Madres de Plaza de Mayo” tras el restablecimiento de los gobiernos constitucionales a partir de finales de 1983. En Nicaragua, el movimiento de mujeres está atravesando por un proceso de múltiples divisiones y de dispersión, en un marco de relajamiento de sus vinculaciones con las mujeres de los sectores populares. La derrota electoral del sandinismo aceleró y profundizó las disidencias dentro de AMNLAE —Asociación de Mujeres Nicaragüenses “Luisa Amanda Espinosa”— y dio paso al surgimiento de varias nuevas pequeñas organizaciones y centros independientes del FSLN, al tiempo que favoreció un avance de perspectivas y enfoques más próximos a las mujeres urbanas, profesionales y en general de sectores de clases medias, que anteriormente habían tenido dificultades para expresarse. Por su lado, el fin de la guerra, la agudización de la crisis económica y algunas políticas del nuevo gobierno crearon condiciones para una reversión del proceso de feminización de la fuerza de trabajo, sobre todo rural, que avanzó durante la segunda mitad de la década de 1980, reubicando forzosamente a las mujeres de las clases populares en su ámbito doméstico tradicional.⁷ Pero incluso en estos casos en que los resultados pueden parecer amargos, o exiguos, es indudable que la problemática de la discriminación de género figura inscrita, con derecho propio, en la agenda del debate social, en un marcado contraste con la situación de diez años atrás.

⁷ Olivera *et al.*, 1990; INIM, 1987; *Barricada Internacional*, 343 (noviembre de 1991), 15-17, y 347 (marzo de 1992), 22-31.

Trabajadores, campesinos y reforma agraria

El acento en estas nuevas expresiones de la insatisfacción social no debería llevar a reducir la importancia de las movilizaciones y el activismo de los actores populares “tradicionales”: campesinado y asalariados urbanos y rurales. En Guatemala y El Salvador el movimiento sindical urbano alcanzó niveles altos de activismo en la década de 1970, hasta que el deterioro del clima institucional y la represión militar cerraron el espacio a las luchas reivindicativas. La tensión entre éstas y las luchas políticas se resolvió en favor de las segundas, en la medida en que las demandas gremiales recibían como respuesta la represión; los movimientos de trabajadores quedaron envueltos en la primacía de la lucha político-militar. Por razones distintas, la prioridad de lo político sobre lo reivindicativo fue muy marcada en Nicaragua: la estrategia policlasista de “unidad nacional” del sandinismo, y posteriormente el modo en que se encaró la crisis económica, reforzaron las tendencias a convertir al movimiento sindical en un aparato del estado revolucionario, más activo en la ejecución de políticas globales que en la promoción de los intereses inmediatos de sus afiliados (CINAS, 1985; Vilas, 1986 y 1989a cap. IV; Castañeda Sandoval, 1991; Figueroa Ibarra, 1991:128 y ss.).

La activación del campesinado y del semiproletariado rural fue uno de los aspectos más notorios de las luchas sociales en el decenio de 1980. La agitación rural abonó el terreno para las organizaciones revolucionarias, y éstas impulsaron la protesta agraria. En Nicaragua y El Salvador, reformas agrarias de distinto tipo y que obedecieron a motivaciones disímiles introdujeron modificaciones profundas en el acceso de los productores directos a la tierra. En Nicaragua, como una dimensión fundamental del proyecto sandinista. En El Salvador, como un capítulo del golpe militar reformista y posteriormente como parte de una estrategia de cambio preventivo orientada a reducir el nivel de apoyo agrario a la guerrilla.

En Nicaragua 60% de la superficie agrícola cambió de régimen de propiedad y de manos en virtud de la reforma agraria sandinista, beneficiando a dos tercios de las familias campesinas del país; la superficie en poder de grandes terratenientes se redujo en 50% (Baumeister, 1991a). Simultáneamente, la disminución de los precios de la tierra, como efecto de la reforma agraria y, posteriormente, de la guerra y del descalabro de la economía, creó excelentes condiciones para que quienes fueran suficientemente arriesgados como para invertir, pudieran convertirse por relativamente poca plata en agricultores pequeños o medianos.⁸ En El Salvador, después que los latifundistas lograron bloquear la reforma agraria, la crisis y la guerra estimularon la venta de tierras de las grandes fincas en beneficio de medianos propietarios, que aprovecharon la caída de los precios provocada por las amenazas guerrilleras a los terratenientes, por la inestabilidad general y por algunas políticas estatales. Se estima asimismo que las cooperativas de la reforma agraria recibieron alrededor de 37% (algo más de 207 mil hectáreas) de la tierra afectada

⁸ Spalding, 1991. Según la autora, en 1984 el precio de la tierra en algunas zonas llegó a ser 10% de su valor antes de la revolución.

por los cambios de propiedad. En general, la reforma agraria habría beneficiado a 37% de la PEA agraria salvadoreña (Baumeister, 1991b; Ellacuría, 1987).⁹ Por su lado, el FMLN alentó la ocupación de tierras en las áreas que controla, equivalentes a 30% de la superficie de El Salvador. Finalmente, la agilización del mercado de tierras involucró a proporciones importantes del fondo de tierras; 59% de la tierra que cambió de manos correspondía a fincas de menos de 100 manzanas cada una, y otro 32% a fincas de 100 manzanas y más (Goitia, 1991: 167-193). El resultado de todo esto es, a fines de la década de 1980, un perfil agrario considerablemente diferente al de inicios del decenio.

Las modificaciones en los patrones de tenencia, en los niveles de organización rural, en la capacidad de reivindicación de los asalariados y los agricultores, golpearon el principio tradicional de autoridad terrateniente, cuestionaron el derecho latifundista a la desposesión campesina y obligaron al sistema político a aceptar la legitimidad de la protesta rural. Se ha señalado asimismo que el incremento de la presencia de agencias estatales en el campo, vinculadas a la reforma agraria, cambió los criterios de racionalidad imperantes y golpeó severamente la matriz tradicional de relaciones clientelísticas (Mason, 1986; Serra, 1990: caps. III y IV). Después de la derrota electoral del sandinismo, el mantenimiento o la reversión del reparto agrario, la distribución de tierras a los ex contras, el destino que se dará a las empresas agrarias estatales y cuestiones similares, se han colocado en el centro de las tensiones políticas y sociales de Nicaragua. El Acuerdo de Chapultepec, firmado el 16 de enero de 1992 por el gobierno de El Salvador y el FMLN, contempla explícitamente la cuestión de las tierras en poder de los campesinos dentro de las “zonas conflictivas” —es decir, áreas bajo control revolucionario— y establece algunos criterios para dar solución al problema agrario, incluyendo la efectiva afectación a la reforma agraria de las fincas que exceden el límite constitucional de 245 hectáreas (es decir, el cumplimiento de la Fase III de la ley de reforma agraria de 1980).

Estas expresiones de la protesta social, y sus logros, incrementaron el sentimiento de eficacia política de la gente y aumentaron su confianza en la organización popular al dar visibilidad a las ventajas que se derivan de trabajar juntos y de presionar juntos. Pusieron de relieve también la importancia de articular sus demandas específicas en proyectos globales, y la necesidad de defender, dentro de esos proyectos globales, la especificidad y autonomía de sus reivindicaciones particulares. El cierre del ciclo de luchas armadas, de movilización y represión, crea posibilidades, con la recomposición de los sistemas políticos, para que las organizaciones sociales y laborales puedan hacer progresivamente efectivas sus aspiraciones a la eficacia reivindicativa y a la autonomía política, y negociar con los actores tradicionales del sistema político —partidos, sindicatos, burocracias— proyectos de país que se hagan cargo de sus propias perspectivas.¹⁰ Por tanto,

⁹ Vid. sin embargo estimaciones más conservadoras en Prosterman y Riedinger, 1987:170.

¹⁰ Para el caso del movimiento de mujeres en Nicaragua, vid. en este sentido la entrevista a Ruth Herrera en *Barricada Internacional*, 347 (marzo de 1992), 27-29.

al evaluar el saldo de estas décadas de revolución, contrarrevolución, represión y crisis, hay que tomar en consideración estos factores de conciencia, eficacia e identidad, y no sólo los logros materiales específicos.

Diferenciación social

La estructura social centroamericana experimentó cambios marcados. Se consolidó la importancia económica y política del campesinado, al tiempo que las comunidades indígenas se vieron expuestas a profundas alteraciones de signos divergentes; el asalariado urbano y rural redujo su participación en la PEA y los niveles y la eficacia de su organización gremial. El sector informal urbano aumentó su peso económico y demográfico, especialmente en sus expresiones más tradicionales, y la masiva migración de centroamericanos hacia Estados Unidos generó una importante corriente de remesas hacia sus países de origen. En el marco de una profunda polarización social, la burguesía centroamericana vivió un importante proceso de diferenciación interna económica y política.

Consolidación del campesinado

Ante todo, debe destacarse la consolidación del campesinado en Nicaragua y El Salvador como resultado de los cambios en el acceso a la tierra recién mencionados. Ya se señaló que en El Salvador casi dos quintos de la PEA rural resultaron beneficiarios de las fases I y II de la reforma agraria, y aunque algunos de esos beneficiarios debieron posteriormente abandonar las tierras por la guerra, los efectos del mejor acceso al recurso generaron, además del cambio en el perfil de tenencia, resultados de tipo político. En particular, debe mencionarse el arraigo del Partido Demócrata Cristiano en amplios sectores de la población rural, sobre todo en la primera mitad de la década; el acceso a la tierra permitió cooptar a parte de los beneficiarios (Montes, 1988:48). En Nicaragua la reforma agraria sandinista dotó de tierra a unas 138 000 familias campesinas, alrededor de 2/3 del total (CIERA, 1989, vol. IX:41). Junto a este mejor acceso a la tierra, aparecieron o se consolidaron modalidades asociativas de producción: en Nicaragua casi 30% de la superficie afectada por la reforma agraria fue asignada a diversas formas de organización cooperativa; en El Salvador las cooperativas de la reforma agraria recibieron casi 40% de la superficie afectada (Serra, 1990, cuadro 7; Baumeister, 1991b).

El clima institucional permisivo alentó en Nicaragua la organización gremial de los pequeños y medianos productores. A lo largo de la década, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) se convirtió en la más activa organización social de Nicaragua, una sociedad que hasta bien entrada la década de 1970 se caracterizaba por su bajísimo nivel de organización campesina. La autonomía operativa que la UNAG preservó frente al régimen sandinista, sin perjuicio de su notoria afinidad con el FSLN, le ha permitido mantener su eficacia reivindicativa tras el cambio gubernamental, e incluso asumir las demandas de los campesinos que, en el período anterior, se sumaron a la "contra" o colaboraron con ella.

Las comunidades indígenas

El fortalecimiento social y político del campesinado contrasta con el efecto drástico del conflicto político sobre las comunidades indígenas. Se estima que más de un millón de indígenas guatemaltecos fueron víctimas directas o indirectas de la contrainsurgencia lanzada por los regímenes militares desde inicios de la década de 1980 hasta 1986, y que la represión ha continuado de manera menos brutal con posterioridad a esa fecha. Más de 400 aldeas indígenas desaparecieron, los sembradíos fueron arrasados, las poblaciones fueron masacradas o forzadas a huir, en una política que la mayoría de los observadores considera explícitamente diseñada para el etnocidio. El desarraigo, la crisis económica, la urbanización forzada, la desarticulación de las economías locales, están introduciendo transformaciones profundas en la identidad étnica de los afectados (IGE, 1989; Carmack, 1991; Figueroa Ibarra, 1991:231 y ss.).

En Nicaragua, el temprano enfrentamiento de los grupos étnicos de la zona del Atlántico con el régimen sandinista condujo a un período de violenta confrontación. Como parte del conflicto, los grupos afectados fueron reasentados de manera compulsiva, o huyeron hacia Honduras y Costa Rica. El cambio de enfoque en el sandinismo permitió el restablecimiento del diálogo a partir de 1985 y la disminución de los niveles del conflicto, culminando con la aprobación de un estatuto de autonomía étnica regional y la creación de instituciones de autogobierno. El cambio de gobierno en 1990 provocó retrocesos en todas las dimensiones de este proceso, por el etnocentrismo de las nuevas autoridades nacionales, las divisiones en el movimiento étnico y el efecto de las políticas de ajuste económico. La movilización revolucionaria, la guerra y la crisis han provocado, o acelerado, transformaciones marcadas en varias dimensiones de las identidades étnicas de las poblaciones costeñas: cambios en los criterios de legitimación del liderazgo y en el reconocimiento del prestigio social y redefinición de las diferenciaciones sociales dentro de los grupos étnicos, entre otras (García, 1991; Vilas, 1989c:142 y ss.).

El movimiento sindical

La represión política, el efecto de la crisis regional, los desplazamientos de población y las políticas salariales contribuyeron a un redimensionamiento regresivo de la clase obrera y del movimiento sindical. En Guatemala y El Salvador la intensa represión legal y extralegal, y el manejo gubernamental de los instrumentos de política económica, gravitaron negativamente sobre el movimiento durante la primera mitad de la década de 1980. La ilegalización de organizaciones sindicales, la suspensión del derecho a la huelga, la prohibición de manifestaciones públicas de protesta colectiva, etcétera, se combinaron con el secuestro, la desaparición, el encarcelamiento y el asesinato de dirigentes y activistas sindicales, la creación

de sindicatos paralelos y la infiltración de organizaciones y directivas, con apoyo de agencias del gobierno de Estados Unidos o del movimiento sindical de ese país.¹¹

La elección de Vinicio Cerezo como presidente de Guatemala a finales de 1985 ayudó a que se diera una relativa mejoría del clima institucional y permitió una cierta ampliación del espacio de acción de las organizaciones sindicales. Un año antes, la elección de José Napoleón Duarte como presidente de El Salvador redujo en cierto grado la represión a los sindicatos salvadoreños, que había alcanzado manifestaciones de terror sistemático y masacres en 1980 y 1981. El repliegue del movimiento sindical salvadoreño, y en general del movimiento de masas, entre 1980 y 1983-84, parece revertirse hacia 1985-86. Entre 1983 y 1985 aparecen las primeras iniciativas de unidad, que culminarán en febrero 1986 con la creación de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños (UNTS).

El nuevo clima institucional no eliminó la represión contra el movimiento sindical, como lo demuestra el asesinato masivo de la dirigencia de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) a finales de 1989 en El Salvador, o el deterioro reciente del clima político en Guatemala. Además, el movimiento sindical que sobrevivió a los años de la represión salvaje llega a la nueva etapa con poca eficacia reivindicativa, disminución de las tasas de afiliación y una actitud a la defensiva. El crecimiento del desempleo en el sector formal y la transferencia de fuerza de trabajo hacia el sector informal donde la presencia sindical es inexistente, las políticas de ajuste y la contracción del gasto público figuran entre los factores que dificultan la recomposición del movimiento obrero organizado.

Por el contrario, el triunfo revolucionario y la reactivación económica inmediatamente posterior favorecieron en Nicaragua el crecimiento del empleo asalariado, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, el crecimiento de la tasa de sindicalización y de la frecuencia y vigencia de los convenios colectivos de trabajo, el número de sindicatos sandinistas y no sandinistas, y una amplia activación de la lucha de clases (Vilas, 1984 cap. v). Después de un período inicial de intensas tensiones, las organizaciones sindicales sandinistas consolidaron su dependencia respecto del FSLN y del gobierno revolucionario, subordinando su eficacia reivindicativa y su participación en la gestión de la economía a la conducción política de la estrategia de unidad nacional con la burguesía nicaragüense. El ascenso de la guerra contrarrevolucionaria a partir de 1983-84, y el rápido deterioro de la economía desde 1984, llevaron al movimiento sindical, para entonces claramente hegemonizado por el sandinismo, a privilegiar el apoyo a las políticas definidas desde el estado, en detrimento de las movilizaciones reivindicativas: participación en las milicias y en el servicio militar, hincapié en la disciplina laboral, postergación de reivindicaciones salariales, etcétera. La abdicación de demandas laborales y la

¹¹ Por ejemplo, el intento del gobierno demócrata cristiano de El Salvador, apoyado por la AFL-CIO, de crear en marzo de 1986 la Unión Nacional de Obreros y Campesinos (UNOC) como respuesta a la fundación, un mes antes, de la combativa UNTS. *Vid.* Weinrub y Bollinger, 1987; Barry y Preusch, 1986; Frundt, 1987; Carr, 1991.

subordinación de los intereses reivindicativos al proyecto político de unidad con la burguesía redujo el arraigo de los sindicatos sandinistas en la clase obrera (Vilas, 1989a:136 y ss.). La subordinación al gobierno impidió incluso la defensa de los intereses de sus bases cuando, desde mediados de 1988, el gobierno sandinista inició la aplicación de una estrategia de ajuste monetario que deterioró adicionalmente las condiciones de vida de los trabajadores: reducción drástica del salario real, elevación de las tasas de desempleo abierto, mayor deterioro de los abastecimientos básicos, etcétera.¹² La reactivación del sindicalismo sandinista después de las elecciones de febrero 1990, y su búsqueda de autonomía respecto del FSLN, contrastan así marcadamente con el panorama anterior (Vilas, 1990b; Vargas, 1990:133 y ss.).

Informalización urbana

Durante el decenio de 1980 se registró un crecimiento desigualmente marcado del sector informal urbano (SIU). Varios factores actuaron en este sentido: tendencias estructurales que dificultan la absorción de fuerza de trabajo en el sector formal; el movimiento de población rural hacia las ciudades huyendo de la guerra y la inseguridad; el efecto de las políticas de ajuste. En 1982, un tercio del empleo metropolitano centroamericano estaba en el SIU, mientras que hacia 1988-89 se estimaba en 40% (Pérez Sainz y Menjívar, 1991). Este crecimiento ha tenido lugar sobre todo en las expresiones más tradicionales del SIU, como es el autoempleo, que representaba a fines de la década entre la mitad y dos tercios del sector.

El crecimiento del SIU centroamericano no involucra únicamente la expansión del empleo y de la economía informales, aunque éstos sean los aspectos más estudiados, no necesariamente más conocidos, del fenómeno. Existe una vasta dimensión de la informalidad que se refiere a prácticas sociales de tipo político, a la formación y reconocimiento de estructuras de autoridad, jerarquías sociales, prestigios y pautas culturales que guardan poca similitud con la dimensión formal de la sociedad, por más que se articulen en ella. Los canales de información y de participación en la resolución de sus problemas, ¿son los mismos cuando nos referimos a los grupos que se desenvuelven en el sector informal, que cuando nos referimos a los que trabajan, comen, juegan, visten y viven sobre todo en el sector formal? Cuando registramos el bajo nivel de participación en sindicatos y partidos políticos de las mujeres que se desempeñan en el sector informal: ¿quiere esto decir que esas mujeres no tienen participación, o significa que participan por canales e instituciones distintos? Es posible que el abstencionismo relativamente alto que se registra en las elecciones recientes en Guatemala y El Salvador exprese, más que el repudio o desinterés por todo tipo de política, la desafección hacia el tipo de política, de discurso, de convocatorias que predominan en la política institucional dominante y que no expresan las expectativas ni los reclamos de la creciente masa de población empujada a vivir, y no sólo a trabajar o comprar y vender, fuera de los ámbitos de la sociedad formal.

¹² A finales de 1988 el salario real representaba 7.2% del nivel 1980=100: Taylor, *et al.*, 1989.

Cambios en la polarización social

Uno de los efectos de la llamada década perdida es el crecimiento de la población en situación de pobreza y el ahondamiento de las desigualdades sociales en todo el continente. La situación centroamericana muestra algunos matices diferenciales respecto de ese panorama general. Aunque se carece de información actualizada sistemática, las cifras disponibles sugieren que el crecimiento de la población en condiciones de pobreza no involucró, automáticamente, una paralela ampliación, o profundización, de las desigualdades sociales. La combinación del efecto de las políticas de cambio socioeconómico (reformas agraria e impositiva, nacionalizaciones de la banca y del comercio exterior entre otras), con los de la guerra (desplazamientos de la población, abandono de tierras, desarticulación de los mercados de trabajo, etcétera) y los de la crisis capturó al conjunto de los grupos y clases sociales; el descenso hacia mayores niveles de pobreza de las sociedades no fue acompañado por un crecimiento equivalente de las desigualdades. La situación no mejoró, pero tampoco parece haber empeorado mucho. En El Salvador y en Nicaragua las medidas de reforma y de promoción social impulsadas por los gobiernos demócrata cristiano y sandinista en la primera mitad de la década de 1980 fueron eficaces para reducir el efecto combinado de los conflictos político-militares y la crisis económica en las condiciones de vida de las clases populares.

En El Salvador las reformas impulsadas por las juntas cívico-militares en 1979-1980, y por el gobierno demócrata cristiano que les sucedió, parecen haber favorecido una redistribución de los ingresos en favor de los grupos medios. Entre 1974 y 1985 el 20% más rico de las familias salvadoreñas redujo su participación en el ingreso nacional de 64.8% a 53.6%, por efecto de la ejecución de la reforma agraria y la nacionalización de la banca y del comercio exterior; el 40% inferior de los perceptores de ingreso incrementó su posición relativa en el mismo lapso de 8% a 11% (Rosenthal, 1982; Lazo, 1990). Por su lado, los grupos medios incrementaron su participación en el ingreso de 27% a algo más del 35%, situación que ayuda a explicar la erosión de la alianza que a principios de la década de 1980 habían forjado con las organizaciones insurgentes. Los esfuerzos parcialmente exitosos por reducir la inequidad social no fueron auspiciados por gobiernos revolucionarios sino por el tibio reformismo de la democracia cristiana. Debe empero reconocerse que presidió su ejecución una estrategia de prevención, en el sentido de que la reforma agraria y las medidas que trataron de cercenar el poder de los grupos dominantes tradicionales fueron encaradas ante todo como medios para remover los aspectos más inicuos de una realidad social que, en la interpretación demócrata cristiana, alimentaban la insatisfacción popular y abonaban el terreno para la insurgencia.

No existen cifras equivalentes de distribución del ingreso en Nicaragua, pero algunas aproximaciones indirectas fundamentan la hipótesis de que, por lo menos en el período 1980-84, la conjugación de reforma agraria, expansión de los servicios sociales y de los subsidios al consumo básico, favorecieron una mejoría relativa

de la posición de ingresos de los sectores populares, tendencia que se revirtió con el cambio de políticas y el deterioro amplio de la situación económica a partir de 1985 (Vilas, 1989a:100 y ss.). En estos vaivenes, los grupos medios urbanos que se articularon a las agencias del sector público parecen haber estado en condiciones de mejorar más que cualesquiera otros su acceso a recursos y su captación de ingresos. En años recientes, el deterioro social se incrementó, y en los momentos actuales casi 69% de la población de Nicaragua se encontraría debajo de la línea de pobreza.¹³

En Guatemala la situación parece haber evolucionado de manera inversa. En 1980, 63% de los guatemaltecos vivía en condiciones de pobreza, la mitad de ellos (32%) en la pobreza extrema, mientras que en 1989 las cifras habían aumentado a 80% y 55% respectivamente. Entre 1980 y 1989 el 10% más pobre de la población de Guatemala redujo su participación del 2.4% del ingreso nacional, a 0.5%.¹⁴

Transformaciones en las clases empresariales: las nuevas generaciones

La confrontación revolucionaria enmarcó asimismo un proceso de diferenciación interna en las clases dominantes centroamericanas, del que no fueron excluidos los países directamente involucrados en los conflictos. Algunos segmentos modernizantes del empresariado encontraron ocasión de precisar sus propias orientaciones y estrategias en los embates revolucionarios y en las críticas de sectores amplios de población a la dominación tradicional de las fracciones oligárquicas de la burguesía. Esto no implicó simpatías hacia las propuestas revolucionarias o reformistas sino, por el contrario, un intento de enfrentarse más eficazmente a ellas. Gozaron, en este empeño, del asesoramiento y respaldo de algunas agencias del gobierno de Estados Unidos.

Las transformaciones en las bases económicas de clase, la modernización de las nuevas generaciones, y la incorporación de elementos provenientes de las fuerzas armadas y del negocio de la droga han cambiado la fisonomía de las clases dominantes centroamericanas. Estos cambios deterioran asimismo la gravitación de la estructura tradicional de redes de parentesco que sustentaba y articulaba recíprocamente a las élites centroamericanas. El ciclo de revolución y contrarrevolución que asoló a la región y la penetración de los recién llegados han convertido a las "catorce familias" salvadoreñas en poco más que una referencia del pasado, del mismo modo que están erosionando el toque aristocrático de la "calle Atravesada" en Nicaragua, y resquebrajan el círculo cerrado de la vieja oligarquía guatemalteca (Casaús Arzú, 1992; Vilas, 1992).

El crecimiento industrial de la década anterior, la expansión de nuevos rúros de la agroindustria, la introducción de algunas innovaciones técnicas y la

¹³ Cifras presentadas por William Ramírez, representante del FSLN ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, en la sesión del 1 de abril de 1992.

¹⁴ UNICEF/SEGEPLAN, 1991. De acuerdo con este estudio, 26.4% de los patronos y 29.7% de los profesionales se encontraban en la pobreza extrema (p. 13).

ampliación de las relaciones comerciales y financieras con el exterior estimularon una diferenciación en el seno de las clases propietarias centroamericanas. La imagen de los grupos dominantes del istmo como una oligarquía terrateniente semifeudal, que ya había sido erosionada parcialmente por el acelerado crecimiento y las transformaciones económicas de las décadas anteriores, experimentó nuevas modificaciones (Sevilla, 1984; Jiménez, 1986; De Sebastián, 1986; Painter, 1987; INFORPRESS 1988; CEPAL, 1990b). Una nueva generación de empresarios, muchos de ellos con formación académica en universidades de Estados Unidos y Europa, comenzó a tener ideas propias sobre cómo manejar la economía, los negocios y la política en sus países.

El involucramiento directo de estos empresarios modernos en la política contrasta con el modo tradicional en que las élites económicas centroamericanas se desenvolvían; por lo menos desde la década de 1930 habían delegado en las fuerzas armadas el control cotidiano del estado y la política.¹⁵ La división del trabajo entre gestión económica y gestión política comenzó a erosionarse en el decenio de 1970, cuando el ejército guatemalteco, como entidad corporativa, empezó a incursionar en el mundo de los negocios, y sobre todo con el estallido de la crisis regional y con la creciente articulación de las fuerzas armadas a la estrategia de guerra contrainsurgente inspirada por los Estados Unidos. Los grupos dominantes perdieron ascendencia en los ejércitos, debieron aceptar la competencia militar en el terreno de los negocios y las mayores presiones impositivas de los gobiernos militares; en El Salvador, la estrategia de contrarrevolución preventiva del gobierno demócrata cristiano incluía reformas económicas a las que la empresa privada se oponía.

Las propuestas de esta nueva generación de dirigentes combinan el acento en la eficiencia económica medida de acuerdo con los patrones de un mercado que no admite regulaciones estatales, con una amplia apertura externa, y la promoción de una modernización política que a un mismo tiempo erradique el prebendalismo y las corruptelas tradicionales, y bloquee las aspiraciones de la izquierda. Colocados en una posición de defensa de intereses de clase, los nuevos empresarios expresaron desacuerdos con varios aspectos de la estrategia contrainsurgente de Estados Unidos: en El Salvador, por ejemplo, se opusieron a la reforma agraria y a las nacionalizaciones ejecutadas por las juntas cívico-militares y el gobierno demócrata cristiano de José Napoleón Duarte, y protagonizaron masivas y eficaces manifestaciones de protesta. En Guatemala bloquearon el programa de reformas del también demócrata cristiano presidente Vinicio Cerezo (INFORPRESS, 1988; Tapia, 1989a).

En 1982, como parte de su amplio involucramiento en la formulación de estrategias para enfrentar a la revolución en El Salvador, la USAID (Agencia para

¹⁵ Entre 1932 y 1980 todos los presidentes salvadoreños eran oficiales del ejército, y todos los ministros de agricultura y de economía eran, hasta principios de la década de 1970, representantes de la burguesía cafetalera (Gordon, 1990). En Guatemala, según Black (1984:49) desde el golpe militar de 1963 los ministros de economía de ese y de los sucesivos gobiernos eran designados directamente por el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras).

el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos) auspició la creación de la FUSADES (Fundación Salvadoreña de Desarrollo). La FUSADES nucleó a los miembros de los grupos empresariales dispuestos a cooperar con la estrategia de la administración de Ronald Reagan para Centroamérica, y se convirtió en el vocero principal de las reformas que se trató de impulsar en esos años para desactivar el potencial de conflicto social que, en la visión demócrata cristiana, alimentaba el reclutamiento de las organizaciones revolucionarias. La FUSADES puso atención especial en la formulación de propuestas de dinamización de la economía salvadoreña mediante la promoción de nuevas líneas de agroexportación, adopción de políticas de ajuste orientadas a cerrar los desequilibrios globales y fuertes críticas al esquema anterior de sustitución de importaciones. La FUSADES constituye una especie de *think tank* de la iniciativa privada salvadoreña, con vinculaciones ideológicas notorias con ARENA y con fuerte oposición al gobierno de José Napoleón Duarte. Destacan en efecto sus críticas hacia varios aspectos de ese gobierno —por ejemplo, el cuestionamiento del estatismo implícito, según FUSADES, en las estrategias de acción cívico-militar auspiciadas por la democracia cristiana— e incluso la propia estrategia estadounidense de guerra de baja intensidad, que a juicio de FUSADES no ponía fin al accionar militar del FMLN, y en cambio alimentaba la corrupción en el Estado y en las fuerzas armadas, a través de un flujo generoso e incesante de fondos que en su mayoría no se destinaban a la guerra (CINAS, 1987, Tapia, 1989b). A riesgo de simplificar, podría afirmarse que hacia fines de la década de 1980 el empresariado modernizante y políticamente agresivo de El Salvador había logrado articular su acción en tres niveles: el ideológico (FUSADES), el gremial (ANEP, Asociación Nacional de la Empresa Privada) y el político (ARENA).

En Guatemala la USAID impulsó en 1981 la creación de la Cámara Empresarial, un ente dedicado al análisis y la recomendación de políticas, que también pone el acento en la necesidad de modernizar la agroexportación aprovechando las ventajas comparativas que brinda la existencia de una oferta abundante de mano de obra barata (INFORPRESS, 1988). Con el fin de evitar tensiones y superposiciones con el CACIF que hasta ese momento combinaba la articulación de las reivindicaciones gremiales con la producción de ideología, se creó la APA, Asamblea de Presidentes Ampliada, que coordina las relaciones y actividades de CACIF y CAEM.

Un aspecto importante de estas nuevas organizaciones es que han evitado entrar en competencia con las asociaciones empresariales que ya existen en materia de reivindicaciones gremiales o sectoriales. El enfoque predominante subraya directamente la formulación de estrategias y de políticas, más que la articulación de demandas específicas, terreno en el que siguen desenvolviéndose las asociaciones y cuerpos tradicionales. En el curso de la década pasada, estas asociaciones y cámaras fortalecieron su gravitación y se convirtieron en actores dinámicos en sus respectivos países. La crisis de los sistemas políticos —por la recurrencia de los regímenes dictatoriales y el fraude electoral primero, y por el desafío revolucionario y la represión más tarde— redujo la capacidad de los partidos políticos para mediar entre los actores de la vida económica y social, y las instituciones políticas; los gremios empresariales —como los sindicatos, del otro lado de la frontera de

clase— asumieron directamente la defensa y promoción de los intereses de sus representados.

La modernización de los sectores empresariales fue mucho más lenta en Nicaragua. Influyeron en esto varios factores:

1) La dictadura somocista, que concentró en sus miembros y allegados gran parte de los frutos de la expansión económica y de la modernización. La “competencia desleal” en detrimento de los otros grupos de comerciantes, terratenientes e incipientes industriales, los enfrentó a la dictadura, aunque desde una perspectiva diferente a la del sandinismo.

2) Así como la clase se dividió con relación al somocismo, se dividió con relación al sandinismo. Muy tempranamente las cámaras gremiales de los empresarios fueron excluidas de la elaboración de la política económica, incluso de las medidas que el sandinismo diseñaba para captar el apoyo de algunos segmentos de la clase empresarial. Pero al mismo tiempo, otros grupos de industriales, terratenientes y comerciantes aceptaron las reglas del juego sandinista y gracias a ello consolidaron su posición en el mercado. Las diferencias dentro de la comunidad de negocios se profundizaron; los empresarios que aceptaron “hacer negocios con el gobierno”, como se decía entonces con censura, cortaron vínculos con las asociaciones gremiales que quedaron de más en más en manos de los sectores más antisandinistas del empresariado. Estos sectores recibieron extraordinaria promoción internacional y fueron sistemáticamente presentados por las agencias informativas del gobierno de Estados Unidos como la expresión más auténtica, y de hecho única, de la iniciativa privada nicaragüense

3) El deterioro de las relaciones políticas con Nicaragua quitó espacio para la acción de las agencias culturales y de desarrollo del gobierno de Estados Unidos, que habían sido particularmente operativas en la creación de las instituciones a través de las cuales se expresaban las nuevas tendencias del empresariado en los otros países de la región.

La creación en 1988 de la CORDENIC (Comisión para la Recuperación y el Desarrollo de Nicaragua) puede interpretarse como el intento más definido por dotar a las nuevas camadas del empresariado nicaragüense, de algo así como una expresión programática, equivalente a las ya mencionadas en Guatemala y El Salvador. La CORDENIC nucleó a un grupo reducido de empresarios y de economistas bajo la inspiración de la “Comisión Sanford” de la que dos de los fundadores eran miembros.¹⁶ La CORDENIC fijó como objetivo superar las divisiones entre la comunidad de negocios y promover el diálogo con el gobierno sandinista en el marco del proceso de Esquipulas II. Como no era una organización gremial, no tuvo que competir con las cámaras empresariales existentes, recalcitrantemente antisandi-

¹⁶ La Comisión Internacional para la Recuperación y el Desarrollo de Centroamérica, creada bajo los auspicios del senador demócrata Terry Sanford después de los acuerdos de paz de Esquipulas II.

nistas. Tras las elecciones de febrero 1990, varios de los miembros de la CORDENIC accedieron a la conducción del nuevo gobierno.¹⁷

Negocios de uniforme

La diferenciación interna de los grupos económicos dominantes se vio complementada por el involucramiento de altos oficiales de las fuerzas armadas de Guatemala y El Salvador en activas prácticas de acumulación, por lo menos desde la década de 1970. Aprovechando las políticas de expulsión de campesinos, el acceso privilegiado a la información, la manipulación del crédito público y de los grandes proyectos de desarrollo, altos oficiales guatemaltecos se convirtieron en grandes terratenientes e inversionistas. La participación personal de los jefes se combinó con la participación institucional del ejército en el mundo de los negocios: bancos, fondos de pensión, líneas aéreas, proyectos inmobiliarios, entre otros.¹⁸ Estos refinados mecanismos de acumulación no desplazaron a los estilos tradicionales de patrimonialismo, prebendalismo y corrupción, sino que se articularon a ellos. Los abundantes fondos para la guerra y el desarrollo volcados durante la década por las agencias del gobierno de Estados Unidos ampliaron el tamaño del pastel.

Narconegocios

La incorporación de Centroamérica a la red del tráfico internacional de estupefacientes tiene que ver también con esta rápida conversión de muchos militares centroamericanos en fuerzas económicas de primer orden. Por lo menos desde 1970, Centroamérica es un eslabón estratégico en las rutas de comercialización de la droga producida en Sudamérica hacia el mercado expansivo y solvente de Estados Unidos. En años recientes surgió evidencia del involucramiento de oficiales de las fuerzas armadas de Honduras, de la "Resistencia Nicaragüense" (contras) y de funcionarios del gobierno de Costa Rica en el narcotráfico, en algunos casos con la participación activa de agencias del gobierno de Estados Unidos. La militarización de las relaciones de Estados Unidos con la región y el carácter encubierto de muchas de las operaciones de contrainsurgencia y de apoyo a la contrarrevolución nicaragüense, favorecieron el auge del negocio (Scott y Marshall, 1992). Por su propia naturaleza clandestina, el tráfico de drogas requiere el control de los espacios aéreos, aduanas, puertos y aeropuertos, rutas marítimas y costas. Es

¹⁷ Antonio Lacayo (ministro de la Presidencia), Silvio de Franco (ministro de Economía y posteriormente presidente del Banco Central), Francisco Rosales (ministro del Trabajo), Enrique Dreyfus (ministro de Relaciones Exteriores), entre otros.

¹⁸ Según Dunkerley (1988:461 y ss.) hacia 1983 el 60% de la superficie del departamento de Alta Verapaz era propiedad de militares; cuatro oficiales del ejército que habían integrado los gobiernos militares de Laugerud y de Lucas García eran dueños de 285 000 hectáreas en la Franja Transversal del Norte, en el departamento del Petén (467). Sobre el involucramiento corporativo del ejército, Painter, 1987:47-51. *Vid.* Millman, 1990 sobre el Salvador.

decir, actividades que en todos los países del mundo son desempeñadas por las fuerzas armadas o por cuerpos subordinados a ellas.¹⁹

En años recientes, Centroamérica ingresó directamente en la narcoagricultura. Hacia 1987, Guatemala se había convertido en uno de los diez mayores productores mundiales de mariguana e iba en camino de otro tanto en la producción de amapola. Vastas extensiones en los departamentos de San Marcos y de Huehuetenango están dedicadas al cultivo de la amapola, y de mariguana en el Petén; la rápida reinsertión de Nicaragua en esta red después del cambio de gobierno ha sido reconocida incluso por las nuevas autoridades (*Barricada Internacional*, 344, diciembre de 1991:11; Vilas, 1990c). Las dificultades de los envíos de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, y los operativos del gobierno mexicano en su propio territorio, más la extraordinaria rentabilidad del negocio, crearon condiciones para su desplazamiento hacia el istmo. Las características técnicas de los cultivos —facilidad de manejo, resistencia a las plagas, etcétera— crean ventajas comparativas para el cambio en el uso del suelo, en un contexto de políticas agrícolas neoliberales que reducen la rentabilidad de la producción tradicional de granos básicos.²⁰

El auge de la producción de narcóticos está generando el surgimiento de grupos sociales diferenciados, con enorme capacidad para competir con los grupos dominantes tradicionales en materia de propiedad de tierras, capitales, dinero y gravitación institucional. Simultáneamente, la expansión de la narcoagricultura altera las bases sociales de las organizaciones populares que actúan en las áreas rurales afectadas por estas modificaciones en el uso de los suelos.

Dependencia de subsidios externos

Se calcula que hacia finales de la década de 1980 más de 1 300 000 nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños habían migrado, legal e ilegalmente, hacia Estados Unidos. La magnitud de esta corriente recuerda la que tuvo lugar desde República Dominicana también hacia Estados Unidos después de los sucesos de 1965. Como entonces, el desplazamiento de población dio origen a una corriente de remesas que, a nivel agregado, igualó e incluso superó los ingresos provenientes de los principales rubros de exportación. En el nivel microeconómico ayudó a subsistir a los familiares que quedaron atrás, definiendo una estrategia de sobrevivencia que contó con la obvia anuencia de las autoridades de Estados Unidos. En el período de 1980-89 ingresaron a El Salvador por concepto de remesas familiares, 3 366.7 millones de dólares; a Guatemala 1 704.9 millones, y a Nicaragua 294 mi-

¹⁹ Vid. Dickey, 1985; Marshall, *et al.*, 1987; Sklar, 1988; República de Costa Rica, 1989a., 1989b. Las revelaciones del gobierno cubano sobre el involucramiento de oficiales del ejército y organismos de seguridad de ese país en actividades de narcotráfico ofrecen información sobre el *modus operandi* del negocio que es válida para cualquier otro país: Gobierno de Cuba, 1989.

²⁰ Se estima por ejemplo que en Guatemala una cuerda (alrededor de 450m²) de amapola generaba en 1988 al agricultor unos 20 000 quetzales (aproximadamente 4 500 dólares), es decir muchas veces más que la producción de maíz o frijoles.

lones. Solamente en 1989, 575 200 migrantes salvadoreños remesaron desde Estados Unidos 759.4 millones; 500 000 migrantes guatemaltecos remesaron 248.1 millones, y 255 000 nicaragüenses, 59.8 millones de dólares. Esas sumas equivalen, para El Salvador, a 15% de su PIB o 96.7% de los ingresos de exportación; en Guatemala a 2.9% y 16.4% respectivamente, y en Nicaragua a 2.4% y 17.4% (CEPAL, 1991).

Así como la migración hacia los Estados Unidos se convirtió en una fuente de subsistencia para los que se quedaron, la vinculación a fuentes gubernamentales y no gubernamentales de financiamiento externo ha devenido un medio de vida para una porción considerable de profesionales de los sectores medios. El clima de inseguridad política, las intervenciones militares a la universidad y la falta de perspectivas de empleo en el sector público redujeron las perspectivas de trabajo de los profesionales y académicos que pudieron quedarse en Guatemala y El Salvador. Lo mismo que en el decenio anterior en América del Sur, la cooperación externa, gubernamental y no gubernamental, fue estratégica para el surgimiento y mantenimiento de múltiples centros, institutos, proyectos, etcétera, que albergaron a estos profesionales. En Nicaragua las circunstancias que ampliaron la vinculación de estos sectores de las clases medias con los donantes extranjeros se refieren al rápido deterioro de la economía del país y, sobre todo, al cambio de gobierno en 1990, que cerró a muchos de ellos las puertas del sector público. En los tres países, una explosión de ONG (organizaciones no gubernamentales) locales y extranjeras ha permitido la sobrevivencia, e incluso el progreso, laboral y material, de grupos amplios de las clases medias profesionales politizadas.²¹

La fuerte dependencia de amplios segmentos de las clases populares de las remesas de los familiares que se fueron a Estados Unidos, y de la pequeña burguesía profesional de las agencias donantes externas, es una dimensión de la creciente dependencia de las sociedades centroamericanas más expuestas al conflicto político y militar, de la asistencia financiera internacional. Nicaragua recibió 42% de toda la ayuda al desarrollo dirigida hacia Centroamérica durante la década de 1980, equivalente a un promedio de 667 millones de dólares por año, cifra que no incluye la asistencia militar. Estados Unidos proporcionó a Guatemala 574.9 millones en asistencia económica y militar entre 1980 y 1988. Entre 1980 y 1991 El Salvador recibió solamente de Estados Unidos, en concepto de ayuda para el desarrollo y asistencia militar, 4 219.6 millones de dólares, o un promedio de casi 352 millones al año (Vuskovic Céspedes, 1991; FLACSO, 1992), aunque otras fuentes mencionan un monto total de 6 mil millones (Schwarz, 1991). La dependencia de la asistencia externa fue fuerte también en Costa Rica y Honduras, dos países que adquirieron particular importancia en la estrategia contrainsurgente de Estados Unidos en la región. En el período de 1980-88, Costa Rica recibió de Estados Unidos 1 099.6 millones de dólares en asistencia económica y de defensa, y Honduras 1446.1 millones (Aguilera, 1989).

²¹ La discusión de Kruijt (1992) sobre el papel de las ONG en el Perú puede extenderse legítimamente, según mi experiencia, a Centroamérica.

En vísperas de la firma del acuerdo de paz con el FMLN (enero de 1992), el presidente Alfredo Cristiani estimó en dos mil millones de dólares la contribución que habría que esperar de la comunidad internacional para una recuperación de la economía salvadoreña. Por su parte, el vicepresidente de Nicaragua afirmó que desde el inicio del actual gobierno, la Casa Blanca brindó al país una ayuda equivalente a dos millones de dólares diarios.²² Estas cifras dan una idea del nivel de involucramiento de los agentes externos en el conflicto centroamericano y en los procesos institucionales posteriores, y generan una imagen de países subsidiados en los receptores. En todo caso, vuelven a plantear la cuestión compleja, y para muchos antipática, de la viabilidad como estados nacionales individuales de estas entidades, y coloca el debate contemporáneo sobre la integración regional bajo nuevas luces.

3. ELECCIONES Y DEMOCRATIZACIÓN INSTITUCIONAL

El impulso dado por Estados Unidos a la democratización electoral de la región tuvo que ver con una estrategia contrainsurgente que buscaba deslegitimar la propuesta revolucionaria y restarle apoyo social. Tienen razón en este sentido quienes analizan los procesos electorales de la década de 1980 en Guatemala y El Salvador como un capítulo de una estrategia contrarrevolucionaria (por ejemplo, Jonas, 1988). Pero la estrategia fue exitosa porque de alguna manera recogía las preferencias de segmentos relativamente amplios de población que habían aceptado, o visto con simpatía, la convocatoria revolucionaria porque consideraron que el carácter dictatorial de los gobiernos y el fraude electoral cerraban cualquier otro camino. La idea según la cual sin cambios estructurales no hay democracia política estable en Centroamérica fue acogida ante todo por los intelectuales y los dirigentes de las organizaciones revolucionarias, pero tuvo una difusión mucho más reducida en las bases y en las masas. En una franja amplia de la población centroamericana la revolución echó raíces agitando la bandera de la democratización política, más que la del cambio social radical. El "informe Kissinger" vio esto con mucha claridad, aunque en el fondo no hizo más que dar expresión conceptual a lo que ya estaba ocurriendo en El Salvador.²³ Las contrapartes locales de esta estrategia fueron, tanto en Guatemala como en El Salvador, los partidos demócrata cristianos. En ambos casos esos partidos ofrecían una perspectiva tibiamente reformista, un arraigo de masas y un probado anticomunismo. Eran, fuera de dudas, lo más parecido al aliado ideal.

La estrategia fue exitosa no sólo porque se convocó a elecciones que, por lo menos al principio, fueron ganadas por los candidatos de la democracia cristiana,

²² *Excelsior* (México), 17 de abril de 1992:2.

²³ *Vid.* Report of the National Bipartisan Commission on Central America, Washington D. C.: Government Printing Office, 1984.

sino porque, efectivamente, las organizaciones revolucionarias quedaron descolocadas. Por tradición doctrinaria y por la evidencia histórica reciente, estas organizaciones suponían que la forma política propia de la dominación burguesa en sus países es la dictadura, el fraude, la represión abierta. ¿Qué otra conclusión era posible extraer de la historia política de esos países? La ruptura con la inercia y la tradición las tomó por sorpresa.

Por su lado, los revolucionarios pueden alegar que también ellos son responsables del establecimiento de convocatorias electorales honestas en lo que toca al cómputo de los votos: fue necesario un desafío revolucionario para que tal cosa ocurriera. Es ante todo el argumento del FSLN, y tiene razón: las elecciones del 25 de febrero de 1990 marcan la primera vez en la historia de Nicaragua en que el voto sirve para cambiar gobiernos. Pero también es cierto que no es éste el tipo de democracia en que los revolucionarios pensaban hace dos décadas o más. Era aquélla una democracia que no excluía a las elecciones, pero que no se reducía a ellas, sino que involucraba asimismo cambios en la estructura socioeconómica, y ante todo una ampliación del acceso de los trabajadores a los recursos básicos: alimentación, educación, salud, trabajo, tierra (Núñez Téllez, 1983). La transformación estructural de la sociedad era considerada la condición de existencia de un sistema político en el que los económicamente poderosos no pudieran imponer su voluntad a los económicamente débiles. Se trataba, incluso, de una democracia en la que no existieran los económicamente poderosos.

Las cosas no resultaron así. La revolución, como estrategia de toma del poder político y transformación profunda de la sociedad, no triunfó —o, en el caso de Nicaragua, no pudo consolidarse. Pero las sociedades cambiaron, y el sistema político se abrió, es más competitivo y mucho menos violento que hace dos décadas, por más que en ambos aspectos es aún largo el camino por andar.

La recomposición de los sistemas políticos centroamericanos en torno a las convocatorias electorales presenta algunos rasgos recurrentes:

1. Todas las elecciones que se han llevado a cabo en el decenio de 1980 fueron ganadas por opciones políticas afines a los grupos de derecha o de centro-derecha, con la única excepción de las elecciones nicaragüenses de 1984. Con la derrota del sandinismo en las elecciones de 1990, el voto ciudadano ha conformado una región con gobiernos abiertamente simpatizantes de los Estados Unidos;

2. El establecimiento de las elecciones para dirimir los conflictos políticos y definir la conducción de la sociedad a través del Estado pone de relieve la fragilidad del sistema de partidos como agentes de mediación y como instancias de representación de intereses. Esta situación afecta ante todo a la izquierda: sus partidos fueron perseguidos, reprimidos, obligados a actuar en la clandestinidad; la participación electoral les estaba vedada, aun a los que no proponían opciones revolucionarias; el asesinato de dirigentes políticos incluso de la izquierda moderada fue moneda corriente hasta muy recientemente: Juan Alberto Fuentes Mohr y Mario Colom Argueta en Guatemala, Héctor Oquellí de El Salvador, para recordar a los más notorios. En estas condiciones: ¿qué experiencia en política electoral era posible adquirir? Y menos aún para la izquierda que optó por irse a la montaña y

apostar a la lucha armada. El nuevo escenario institucional plantea desafíos nuevos a los partidos políticos que postulan el cambio social y la democratización amplia. Sobre esto volveremos en la sección siguiente. Entre tanto es posible suponer que esta (¿inicial?) incompetencia de la izquierda para transferir actividades al nuevo escenario debe haber estado presente en la decisión de transitar del autoritarismo y las dictaduras militares, a los sistemas electorales. Pero también los partidos de la derecha muestran signos de debilidad. Se trata de grupos clientelares, con estructuras frágiles, que funcionaban sobre todo como agencias de movilización de sufragios en poblaciones cautivas —peonaje, campesinado pobre, subproletariado urbano. La activación revolucionaria acabó con la sumisión de la gente, y hoy los partidos que quieren captar votos deben efectuar propuestas concretas. Posiblemente sean el PUSC (Partido de Unidad Social Cristiana) de Costa Rica, y ARENA en El Salvador, los únicos partidos modernos y eficaces de la derecha centroamericana, tanto para ganar elecciones como para definir una estrategia de gobierno y de reorganización social.

3. La vulnerabilidad de los sistemas de partidos contrasta con el vigor de las organizaciones gremiales, tanto de empresarios como, en menor medida, de trabajadores. En lo que toca a la derecha y a los grupos económicamente dominantes, sus batallas políticas más importantes —oposición a iniciativas de reforma agraria e impositiva, estrategias de inversión, política internacional, etcétera— fueron libradas por las cámaras gremiales, ante la incompetencia, la confusión o el bajo perfil de los partidos y los parlamentos: las movilizaciones de ANEP y CACIF contra los gobiernos de Duarte y Cerezo; la oposición activa y virulenta del COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) contra el gobierno sandinista; más recientemente, la oposición de la ANEP al cumplimiento de las cláusulas del acuerdo de Chapultepec referidas a las tierras en poder de los campesinos. Por su lado, la ilegalización de las organizaciones políticas de izquierda puso sobre los hombros de las organizaciones sindicales y sociales el peso de la movilización colectiva en los resquicios de legalidad subsistentes, o en los que se pudieron crear al calor de las presiones populares.

4. La manera en que la política electoral está consolidándose en Centroamérica tiende a colocarla al margen de importantes segmentos de la población. Después de dos décadas de intensa movilización y de involucramiento masivo de actores tradicionalmente excluidos —las mujeres, el campesinado, los grupos étnicos oprimidos— la política oficial centroamericana vuelve a ser, predominantemente, asunto de hombres, de urbanos, de asalariados y de blancos y ladinos, y excluye por lo tanto a la mayoría de la población. Una democratización política sin puentes hacia estos amplios sectores conduce a la desmovilización y se expresa en muy bajos niveles de participación electoral. En Guatemala las elecciones presidenciales de 1985 tuvieron una participación de 50.4% en la primera vuelta y de 47.7% en la segunda; en las elecciones presidenciales de 1990 la participación fue de 41.1% en la primera vuelta, y de 32.9% en la segunda. En El Salvador la cantidad de votos emitidos en las elecciones se redujo en 30% a lo largo de toda la década de 1980; en las elecciones presidenciales de 1989 la participación fue de apenas

40.6%, subiendo a 44.1% en las elecciones parlamentarias de 1991. Solamente en Nicaragua la tendencia a un creciente abstencionismo se invirtió: 23.1% de participación en las elecciones de 1984, y 76.5% en las de 1990 (Lungo, 1989, cuadros 13 y 14; Torres-Rivas, 1991).²⁴

Hasta hoy, los movimientos y organizaciones que expresan las demandas y perspectivas de las mujeres, los pobladores, los indios, la defensa de los derechos humanos, etcétera, se desarrollaron por derroteros diferentes a los del sistema de partidos. Es posible que las modalidades de articulación entre ellos y éste se conviertan en una de las cuestiones centrales de la recomposición del campo popular y de los regímenes políticos en Centroamérica. El aparente apoliticismo o la retracción de la participación popular en las instancias y espacios institucionales —elevado abstencionismo electoral, baja afiliación partidaria y sindical, entre otros— pueden estar expresando no sólo los efectos prolongados de la represión y la violencia, y el cansancio de las masas, sino también la reducida receptividad de aquellas instancias y espacios a muchas de sus demandas y perspectivas, y a sus experiencias de acción colectiva. La disminución de cierto tipo de participación puede ser interpretada, en consecuencia, como un repliegue respecto de espacios y modalidades poco eficaces para proyectar hacia la escena política sus experiencias sociales y las demandas consiguientes, al mismo tiempo que como una búsqueda y progresiva constitución de nuevos espacios y prácticas con mayor virtualidad de eficacia y cambio.

La desmilitarización

Diez años de guerra revolucionaria y contrarrevolucionaria alimentaron un proceso de amplia militarización difícil de desmontar. En una región tradicionalmente vulnerable al fenómeno del militarismo, la relevancia de la función militar en la defensa del orden establecido y las estrechas vinculaciones entre los aparatos militares centroamericanos y el gobierno de Estados Unidos abonaron el terreno para la primacía política de las fuerzas armadas.

La desmilitarización es uno de los objetivos unánimemente aclamados por todos los actores de la crisis, pero hasta ahora solamente Nicaragua ha avanzado significativamente por este sendero. La etapa abierta tras las elecciones de febrero de 1990 enmarca, junto a una drástica reducción de los efectivos del Ejército Popular Sandinista (EPS), una rápida evolución a un tipo de relaciones más convencionales con el nuevo gobierno de ese país —incluyendo la represión de huelguistas y de expresiones de protesta social— y con el ejército de los Estados Unidos.²⁵ Después de la desaparición del bloque soviético, fuente de equipamiento del EPS desde su creación, el ejército de Estados Unidos habrá de desempeñar un papel decisivo en esta cuestión. La renuencia de las fuerzas armadas y del gobierno de El Salvador a dar cabal cumplimiento a las disposiciones del Acta de Chapultepec

²⁴ La participación electoral se calcula en relación al total de población en edad de votar.

²⁵ Vid. *Excelsior* (México), 26 de mayo de 1992:2.

referidas a la desmilitarización y a la depuración es notoria; en Guatemala y Honduras ni siquiera se plantea formalmente la cuestión. Las resistencias se deben tanto a ingredientes ideológicos y políticos —el avance de la subversión— como a razones económicas. La desmilitarización afectará los intereses de quienes se beneficiaron con los abultados presupuestos militares de la década pasada, y con el manejo de la generosa ayuda estadounidense. El tráfico de abastecimientos, el negocio del contrabando, el manejo de los salarios de los subordinados, etcétera, generaron fuentes de ingentes beneficios para muchos oficiales que se resistirán a aceptar una subordinación efectiva al poder civil y, sobre todo, la terminación de esas actividades.

La guerra y las incursiones en el mundo de los negocios que ella posibilitó requieren que la reducción de los cuerpos militares y de seguridad vaya acompañada de alternativas de vida para los afectados. En Nicaragua se optó por ofrecer tierras tanto a los desmovilizados de la “contra” como a los del EPS, pero ésta no parece ser una solución viable en El Salvador, donde no existe frontera agrícola. Por lo demás, la prolongada inestabilidad suscitada en Nicaragua en torno de esta cuestión, y el fenómeno de los “recontras”, los “recompas” y sus alianzas recíprocas, señala que estamos en presencia de una cuestión espinosa.²⁶

4. ALGUNAS ESPECULACIONES HACIA ADELANTE

“Es más fácil alcanzar un régimen político democrático que una sociedad que también lo sea”, escribió hace algunos años Torres-Rivas (1988), y el panorama actual de la región lo confirma. Corresponde preguntarse, por consiguiente, qué perspectivas se presentan para la democratización amplia de las sociedades centroamericanas que están saliendo de los fragores de la revolución y la guerra, y qué posibilidades existen para que las organizaciones revolucionarias lleven adelante sus propuestas de transformación en el nuevo escenario político.

El nuevo escenario: el caso de El Salvador

La transición de un escenario de guerra social a otro de procesamiento político de los conflictos y concertación es siempre compleja. Tanto más en una situación como la salvadoreña, en la que la agresión política y social de los grupos dominantes contra las clases populares siempre ha sido intensa y constituye una dimensión central de la historia del país. A esta inercia histórica, agravada por la profunda polarización social, se agrega la circunstancia de que se arriba al acuerdo de paz tanto

²⁶ “Recontras” es el nombre popular dado a los desalzados de la Resistencia Nicaragüense (contras) que volvieron a tomar las armas ante lo que consideran incumplimiento de promesas de distribución de tierras por el nuevo gobierno. “Recompas” son los desmovilizados del Ejército Sandinista (compas, apócope de compañeros) que han vuelto a armarse y a movilizarse por los mismos motivos. “Revueltos” es el nombre dado a unos y otros cuando llevan a cabo operativos conjuntos: tomas de tierra, ocupación de poblaciones, bloqueo de caminos, etcétera.

por voluntad de las partes en conflicto como por las presiones de la comunidad internacional. Más aún: en el caso del ejército y de varios sectores del gobierno, la aceptación de los acuerdos es ante todo un efecto de las presiones internacionales. Cuando una sociedad llega a un nivel tal de intensidad de los conflictos sociales que éstos se expresan y procesan en el terreno bélico, la superación pacífica de la confrontación, el cierre de las profundas heridas sociales, la reconstitución del tejido social y la recuperación de una cultura efectivamente política son siempre tareas arduas.

Las resistencias antes señaladas indican que la desmilitarización será una cuestión tremendamente conflictiva; el FMLN parece mucho más interesado en ella que las fuerzas armadas, pero la experiencia de Nicaragua sugiere que también dentro de las filas y entre los mandos de las organizaciones guerrilleras se suscitarán tensiones. La sistemática y profundidad de la depuración serán tema de fuertes disputas. No debe descartarse que los ejércitos de la región acudan en auxilio de sus colegas salvadoreños. Es llamativo que en momentos en que debería iniciarse la reducción de la fuerza armada, surjan conflictos fronterizos entre Honduras y El Salvador. ¿Qué mejor excusa para diferir *sine die* la desmilitarización, que la inminencia de tener que salvar la soberanía patria?

La experiencia latinoamericana de otros procesos de enjuiciamiento a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos y de atrocidades señala también las dificultades de llevar esos procesos hasta su culminación. En la medida que los alcances de las investigaciones, del deslinde de responsabilidades y de la aplicación de sanciones estarán estrechamente vinculados a las normas legales que se aprueben, las presiones se dirigirán asimismo sobre los partidos con representación en la Asamblea Legislativa. Las dificultades para juzgar a los responsables del asesinato de los sacerdotes jesuitas constituyen un ejemplo de lo que se afirma. Las experiencias recogidas en Argentina, Uruguay, Chile, indican que un tratamiento parcial de este tema genera frustración en las víctimas y en sus familiares, desmoralización, desmovilización política y, a la postre, erosión de las bases sociales de las organizaciones políticas que constituyen el referente de esos sectores. Pero la experiencia también indica que tiende a generarse una diferenciación de actitudes al respecto en el seno de las fuerzas populares. Junto a quienes mantienen en alto la demanda de un enjuiciamiento sistemático y completo para garantizar la no repetición de esos hechos, es frecuente encontrar a grupos que aceptan la oferta de "olvido y perdón", porque piensan que ésa es la mejor manera de superar una cuestión espinosa ahora que se alcanzó la paz. El tiempo es el mejor aliado de los asesinos, de ahí que siempre apelen a dar largas al asunto.

La transformación de una organización político-militar, formada y forjada en la lucha clandestina, en partido político, implica mucho más que un cambio en el escenario institucional de la acción. Ella involucra, entre otras cosas:

i] Modificaciones en las estructuras organizativas y en los estilos internos. La clandestinidad obliga a adoptar estructuras relativamente rígidas y verticalistas, tanto más en un escenario de guerra. Con el cambio de escenario, aquellas condiciones desaparecen, y lo que antes era justificado por la necesidad, ahora debe ser

transformado de acuerdo a las nuevas condiciones. En consecuencia, las relaciones entre dirigentes, cuadros y bases cambian; el “bajar línea” debe ser remplazado por la discusión interna y la crítica. La democratización organizativa cambia de contenido y amplía sus alcances; ahora se refiere a los procedimientos y estilos internos y no sólo a la propuesta de cambio global.

ii] Las instituciones estatales y el orden legal no son políticamente neutros. La aceptación de unas y otro involucrará la necesidad de adaptar los objetivos de transformación radical a los métodos de la democracia representativa. En el Perú de finales de la década de 1970, la transición desde el régimen militar al civil involucró la convocatoria a una asamblea constituyente, en la que las organizaciones populares alcanzaron una amplia representación. En Colombia, la incorporación del M-19 a la vida política involucró también la elaboración de un nuevo texto constitucional, en la que esa organización desempeñó un importante papel. No hay tales reformas constitucionales en El Salvador. La constitución salvadoreña, a cuyo respeto apela el acuerdo de paz, es una constitución democrática pero también burguesa, en cuya elaboración el FMLN no tuvo intervención. ¿Cómo enmarcar en ella un programa político que apunta a transformar con un sentido popular las estructuras socioeconómicas del país? ¿Podrá el FMLN, convertido en partido político, liberarse de las restricciones y ataduras a que estuvo sometida la Unidad Popular en Chile?

iii] Una organización guerrillera no necesita explicitar detalladamente su programa de lucha; un partido político debe en cambio presentar a sus electores potenciales un programa lo más completo posible. La organización guerrillera lucha por la democratización política y por la transformación social. Su conversión en partido político y su participación en elecciones competitivas lleva a muchos a considerar que la democratización se ha cumplido. El acento recae por lo tanto en las propuestas de transformación social, en las políticas económicas y, en general, en la capacidad para resolverle a la gente sus problemas de trabajo, salud, casa, comida, educación. Es inevitable que, durante un tiempo inicial, la nueva organización política tenga dificultades para explicitar las respuestas que ofrece a las múltiples demandas populares. En los años de la guerra era frecuente responder que la consideración de una gran cantidad de cuestiones económicas y sociales debía quedar “para después”. El después ya ha llegado, y el acceso al gobierno depende ahora de la capacidad de ganar votos en función de propuestas para encarar aquellas cuestiones.

iv] Siempre es difícil mantener el caudal electoral, y para un partido que debe actuar en un ambiente institucional nuevo, mucho más. Es frecuente que, en las primeras elecciones en las que se presenta, la antigua organización guerrillera reciba más votos de los que se esperan. Usualmente ello se debe a méritos “de arrastre”: los guerrilleros tienen buena imagen popular, son valientes, no están comprometidos con los viejos estilos, quieren hacer cosas, son una inyección renovadora en el ambiente político. Pero a poco andar las buenas intenciones se empantanar en los trámites administrativos, las mayorías parlamentarias bloquean las iniciativas, la gente advierte que lentamente los guerrilleros van adoptando los

estilos y las apariencias de los profesionales de la política. Además, el ejercicio de la política electoral demanda el despliegue de recursos de los que usualmente carece una organización nueva: presupuestos, vehículos, acceso a medios de comunicación y otros. El declive electoral del M-19 colombiano después de su excelente desempeño en las elecciones para asamblea constituyente, ilustra esta evolución.

v] Mientras el FMLN aprende a actuar como partido político, el sistema no se mantendrá pasivo. La experiencia de otros procesos políticos sugiere que los grupos dominantes salvadoreños apelarán a dos estrategias básicas: a) eliminación física de dirigentes y cuadros —una estrategia que se ejecutó exitosamente contra la Unión Patriótica colombiana, y que se está llevando a cabo contra la dirigencia de la OLP. Se trata de sacar del medio a los elementos considerados más “duros”, de escarmentar a los otros, y de ampliar el espacio de los más “sensatos”; b) limar las aristas más radicales de la ideología y la acción de la organización, de modo que si de todos modos se mantiene como una opción de poder, ésta carezca de la virtualidad transformadora del pasado. Forma parte de esta estrategia fomentar las divisiones internas, explotar las debilidades personales de algunos dirigentes, favorecer la conversión de otros en empresarios, hacer accesibles a otros más los beneficios materiales y simbólicos de la “sensatez política”. Es la estrategia aplicada exitosamente en Jamaica: el Michael Manley que regresó al gobierno en 1989 nada tiene que ver con el Manley reformador de la década de 1970. Es también la estrategia que parece estar siendo aplicada al FSLN en Nicaragua.

vi] La conversión a partido político y la necesaria aceptación de unas reglas institucionales que no son revolucionarias suelen crear condiciones para rupturas dentro de la organización: el fenómeno de los “recompas” del sandinismo, pero que también se ha manifestado, con otros nombres, o sin nombres, en otros procesos de negociación. Los dirigentes que encabezan estos procesos suelen ser acusados de “ablandarse”, “transar con el enemigo”, “olvidarse de sus compromisos”, “darse vuelta”. Las acusaciones pueden ser acertadas o no, pero en todo caso apuntan a la imagen de separación de los dirigentes respecto de sus bases, a la adopción de estilos y usos, políticos y personales, que se aproximan más a los de los elencos políticos tradicionales.

Con todo, la prueba de fuego de la efectiva democratización salvadoreña deberán darla los grupos dominantes: ¿Estarán dispuestos a aceptar la hipótesis de un revés electoral? La historia reciente señala que los grupos dominantes salvadoreños no han dudado en violentar su propia legalidad cuando ésta, pese a sus limitaciones y sesgos, pudo ser utilizada por las fuerzas democráticas para avanzar políticamente e incrementar su gravitación institucional. El avasallamiento de la voluntad popular en 1972, reiterado en las elecciones de 1977, fue el detonante que abrió el ciclo terrible de dos décadas de revolución y guerra civil. ¿Qué ha aprendido la derecha salvadoreña de esta tragedia?

Perspectivas para el cambio social

Durante más de dos décadas la propuesta política de cambios sociales profundos —socialistas, de liberación nacional o democrático populares— ha estado aso-

ciada en Centroamérica con una estrategia de lucha determinada: la lucha armada. Esta asociación puede ser interpretada como resultado de varios factores que han sido señalados en páginas anteriores: prolongados regímenes dictatoriales en la mayoría de los países, represión que obligó a los militantes de las organizaciones populares a refugiarse en la clandestinidad, fraude electoral sistemático. Las propuestas de democratización y de cambio social, es decir de reforma política y socioeconómica, fueron excluidas de la política oficial, y expusieron a sus partidarios a la persecución, la cárcel, la tortura, el exilio o la muerte. Con excepción de Costa Rica, los gobiernos centroamericanos hicieron que la democracia participativa, la justicia social, el acceso de la gente a recursos básicos y la satisfacción de sus necesidades más elementales se convirtieran en sinónimo de lucha armada, y convirtieron a la lucha armada en sinónimo de cambio radical. Más aún, se tendió a considerar que la radicalización del proyecto de transformación social era una función de la estrategia de lucha política, más que una cuestión referida a la profundidad, los alcances y la orientación del cambio político, socioeconómico y cultural propuesto.

Tras varias décadas de esta asociación, no debe sorprender que algunas organizaciones revolucionarias —ante todo las que surgieron y crecieron en este ambiente de violencia y represión— hayan tenido más éxito actuando en escenarios dictatoriales que en escenarios institucionalmente democráticos con convocatorias electorales, y se hayan sentido más cómodas manejando las dimensiones socioeconómicas de la democratización que sus ingredientes políticos y culturales. Los cambios de estilo en la dominación política de la década pasada colocaron a estas organizaciones semipolíticas y semimilitares bajo intensa presión.

El retroceso de los regímenes militares es un resultado combinado de las luchas populares, de las que esas organizaciones fueron activos participantes, y de la acción de las élites modernizantes que ven en el sistema de partidos y elecciones una vía para reducir el espacio en que aquéllas se mueven. La transición de la dictadura (burguesa) a la democracia (¿burguesa?) tomó por sorpresa a las organizaciones revolucionarias. En general, su reacción fue rechazar los cambios “desde arriba” y descalificarlos por estar encaminados a engañar a las masas, o bien integrarse de lleno en el nuevo escenario dejando de lado, o posponiendo indefinidamente, las propuestas de transformación profunda.

La asociación de una estrategia particular de lucha política con una estrategia de cambio político, socioeconómico y cultural tiene su equivalente de derecha en los que reducen un régimen político —la democracia— a un método de consulta ciudadana —las elecciones—; ambas guardan poca relación con lo que estamos estudiando. Las guerrillas y otras formas de lucha armada en América Latina se remontan a la década de 1950, pero los esfuerzos colectivos para el cambio social existen desde mucho antes. Por otro lado, uno de los períodos de represión más salvaje contra la población guatemalteca fue el que correspondió al gobierno civil, surgido de elecciones, de Julio César Méndez Montenegro.

No obstante, se registran casos recientes de abandono del compromiso con la transformación social, a medida que el ciclo de luchas armadas que se abrió hace treinta años parece cerrarse. Ésta es, en opinión de algunos observadores, la situación del sandinismo en Nicaragua (Vilas, 1991; Fernández Poncela, 1992), y posiblemente también la del M-19 en Colombia. De acuerdo con algunos analistas, sería también la situación por la que atraviesan algunas de las corrientes internas del FMLN en El Salvador, incluso desde antes de los acuerdos de Chapultepec (Béjar, 1991; Miles y Ostertag, 1989). Para algunos, estas mutaciones ideológicas deben interpretarse como pruebas de madurez política; para otros se trata de vulgar oportunismo. En ambos casos, ilustran uno de los resultados efectivos de reducir el diseño global del cambio socioeconómico, político y cultural, a una estrategia particular de conquista del poder del estado.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El recurso a la revolución no permitió el triunfo político de las demandas populares de transformación económica y justicia social, pero la orgía represiva y su generoso financiamiento externo no consiguieron acallar esas demandas, ni impedir que finalmente puedan expresarse en forma legítima en un sistema político más abierto. La gente ha perdido el miedo y ha ganado la experiencia de la organización. Lo que consiguieron, poco o mucho, lo consiguieron gracias a la participación directa. El propio cambio en el discurso de los grupos dominantes expresa el reconocimiento de transformaciones profundas en la conciencia de la gente. El socialismo no sustituyó al capitalismo y en vez de "Patria libre" tenemos la consolidación de la hegemonía de Estados Unidos. Pero los embates revolucionarios contra el orden oligárquico generaron, por acción o por reacción, la redefinición de los regímenes políticos y de las relaciones sociales, y el gobierno de Estados Unidos tuvo que alterar viejas alianzas y sumarse a los esfuerzos en favor de la paz. No pudieron eliminar el analfabetismo o la pobreza, la discriminación de género o la opresión étnica, la falta de trabajo o la desposesión agraria, pero terminaron con la resignación frente a ellas. Los centroamericanos saben hoy que es posible otra cosa, y la experiencia de la eficacia de la participación colectiva no ha caído en saco roto.

El latifundismo centroamericano, uno de los más retrógrados del continente, experimentó golpes importantes que harán difícil su reconstitución; junto con él retrocedieron o se resquebrajaron las prácticas clientelísticas y de patronazgo que ocultaban la asimetría de las relaciones sociales y la explotación del peonaje y el campesinado. La consolidación del campesinado y los cambios en la propiedad de la tierra han dinamizado el mercado de tierras y estimulado el surgimiento o desarrollo de nuevas capas de pequeños y medianos empresarios agrarios y de formas asociativas de producción que habrán de jugar un papel dinámico en la modernización productiva y en la diversificación del comercio exterior. La agenda

de la democratización y la participación se ha enriquecido con la progresiva incorporación de demandas étnicas, de género, culturales, que se articulan con las reivindicaciones ciudadanas y con las ópticas de clase.

Las sociedades de Centroamérica emergen de este período traumático de su historia con un conjunto amplio de transformaciones: muchas de ellas no figuraban en la agenda revolucionaria, y algunas son, incluso, de signo distinto. Unas y otras difícilmente hubieran tenido lugar sin un desafío revolucionario al sistema de poder. Los movimientos revolucionarios fracasaron en su intento por cambiar de raíz los sistemas existentes, pero fueron factores vitales para las reformas políticas y sociales que de todos modos han tenido lugar en los años recientes, y de las que sin duda habrán de sucederse en el futuro. Paradójicamente, la reforma social y política, que hace veinte o veinticinco años era vista con desprecio por los revolucionarios, ha resultado ser el fruto más consistente de sus luchas. Es posible que a los románticos este resultado les parezca demasiado pequeño frente a la magnitud del esfuerzo popular y sus tremendos costos. A los escépticos se les presentará como una nueva ironía de la historia. Para este autor en cambio los frutos recogidos tras estas décadas terribles señalan el primitivismo y la rapacidad que aún caracterizan a algunas minorías dominantes en Centroamérica, que sólo aceptan la reforma cuando ésta es forzada por un cataclismo revolucionario.

La paz involucra el cambio consensual del escenario y de los métodos en el procesamiento de los conflictos sociales y los proyectos políticos. Pero los conflictos siguen allí: en el difícil avance de paz en El Salvador, en los tropezones del diálogo y en la continuada violación de los derechos humanos en Guatemala, en la insatisfacción creciente de los "revueltos" de Nicaragua. El cierre del ciclo de lucha armada no ha significado la solución de muchos de los problemas ni la superación de muchas de las contradicciones que lo detonaron. Para que la paz signifique algo más que la administración hipócrita de un orden inicuo en el que vencedores y vencidos cohabitan mascullando su frustración recíproca, las organizaciones políticas y sociales deberán mantener el compromiso con las aspiraciones y las demandas populares de una vida más digna, aunque los métodos deban ser otros.

Entre tanto, es innegable que, salvo en Guatemala, ya la gente no se mata para transar los conflictos políticos, y es posible levantar públicamente banderas de participación popular y de cambio social sin arriesgarse por ello a perder la vida. Eso no es poco. Constituye la condición elemental pero insoslayable para una convivencia civilizada. Representa también la esperanza por la que una generación de centroamericanos pagó un precio terrible a lo largo de tres décadas de revolución y contrarrevolución, de heroísmos y pequeñeces, de fulgores y de sombras:

caminaremos hasta los sembradíos
y enterraremos esperanzadamente
todos los fusiles,
para que una raíz de pólvora
haga estallar en mariposas
sus tallos minerales
en una primavera futura y altiva

Roque Dalton, "Para la paz"

REFERENCIAS

- Adams, Richard, 1991, "Strategies of Ethnic Survival in Central America", en Greg Urban y Joel Sherzer (eds.), *Nation-States and Indians in Latin America*, Texas University Press, Austin, pp. 181-206.
- Aguilar, Renato y María Rosa Renzi, 1992, *Empleo y desempleo en Nicaragua 1991*, Fundación Friedrich Ebert, Managua.
- Aguilera, Gabriel, 1989, "La guerra en Centroamérica: Dinámica del proceso de militarización y tendencias", en *Síntesis*, núm. 7, enero-abril, pp. 130-157.
- Amnistía Internacional, 1990, *Guatemala: Los niños de la calle*, EDAI, Madrid.
- Aragón, Rafael y Eberhard Lösckke, 1991, "La iglesia de los pobres en Nicaragua", en *Estudios Ecueménicos*, núm. 28, octubre-diciembre, pp. 16-21.
- Barry, Tom y Deb Preusch, 1986, *AIFLD in Central America: Agents as Organizers*, The Resource Centre, Albuquerque.
- Baumeister, Eduardo, 1991a, "Desarrollo agropecuario, participación campesina y diversificación agrícola", en Ruben y Van Oord, 1991:195-233.
- Baumeister, Eduardo, 1991b, "La agricultura centroamericana en los ochentas", en *Polémica*, núms. 14-15, mayo-diciembre, pp. 53-79.
- Black, George, 1984, *Garrison Guatemala*, Monthly Review Press, Nueva York.
- Béjar, Rafael Guido, 1991, "La crisis del socialismo en El Salvador", en Arturo Anguiano (coord.), *El socialismo en el umbral del siglo XXI*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, pp. 324-336.
- Berryman, Philip, 1984, *The Religious Roots of Rebellion*, Orbis Books, Maryknoll, Nueva York.
- Beverly, John y Marc Zimmerman, 1990, *Literature and Politics in the Central American Revolutions*, University of Texas Press, Austin.
- CAICA, Centro de Análisis de la Iglesia en Centroamérica, 1991, "Situación eclesial y crisis en Centroamérica", en *Estudios Ecueménicos*, núm. 25, marzo, pp. 38-49.
- Carmack, Robert M. (comp.), 1991, *Guatemala: Cosecha de violencias*, FLACSO, San José.
- Carr, Matthew, 1991, "Guatemala: State of Terror", en *Race & Class*, núm. 33-1, julio-septiembre, pp. 31-56.
- Casaús Arzú, Marta Elena, 1992, "La metamorfosis de las oligarquías centroamericanas", en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, julio-septiembre.
- Castañeda Sandoval, Gilberto, 1991, *Panorama después de la tempestad: El movimiento sindical y popular guatemalteco en la década de 1980*, CIDE, México, fotocopia.
- CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1990a, *Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1990*.

- CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1990b, *Centroamérica: Algunos problemas de la integración económica. Opiniones de los empresarios*, LC/Mex/L.134, 4 de julio.
- CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1991, *Remesas y economía familiar en El Salvador, Guatemala y Nicaragua*, LC/Mex/R.294 (Sem. 43/2) 27 de mayo.
- CIERA, Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria, 1989, *La reforma agraria en Nicaragua, 1979-1989*, CIERA, Managua.
- CINAS, Centro de Investigación y Acción Social, 1985, *El movimiento sindical salvadoreño, 1979-1984*, CINAS, Cuaderno de Trabajo núm. 5, junio, México.
- CINAS, Centro de Investigación y Acción Social, 1987, *El Salvador: ¿Es la Democracia Cristiana un partido de centro?*, CINAS, México.
- De Sebastián, Luis, 1986, "Consideraciones político-económicas sobre la oligarquía en El Salvador", en *El Salvador: Estado oligárquico y desarrollo económico-social, 1945-1979*, CINAS, Cuaderno de Trabajo núm. 6, marzo, México.
- Dickey, Christopher, 1985, *With the Contras*, Simon & Schuster, Nueva York.
- Dunkerley, James, 1988, *Power in the Isthmus*, Verso, Londres.
- Edwards, Beatrice y Greta Tovar Siebentritt, 1991, *Places of Origin. The Repopulation of Rural El Salvador*, Lynne Rienner Publishers, Boulder.
- Ellacuría, Ignacio, 1987, "Factores endógenos del conflicto centroamericano: Crisis económica y desequilibrios sociales", en *El Salvador: Crisis económica*, CINAS, Cuaderno de Trabajo núm. 9, enero, México, pp. 9-41.
- Fernández Poncela, Anna, 1992, "Frustración y desencanto dejó el FSLN", en *Unomásuno*, 10 de mayo, México, p. 14.
- Figueroa Ibarra, Carlos, 1991, *El recurso del miedo*, CSUCA, San José.
- FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1992, *Centroamérica Internacional*, núm. 8, pp. 1-10.
- Frundt, Henry, 1987, *Refreshing Pauses: Coca-Cola and Human Rights in Guatemala*, Praeger, Nueva York.
- García, Claudia, 1991, *El efecto de un proceso revolucionario en la religiosidad indígena: Los miskitos y la revolución sandinista*, Estocolmo, fotocopia.
- García, Ana Isabel y Enrique Gomáriz, 1989, *Mujeres Centroamericanas*, CSUCA/FLACSO/Universidad para la Paz, San José.
- Gobierno de Cuba, 1989, *Causa 1/89. Fin de la conexión cubana*, Editorial José Martí, La Habana.
- Gobierno de Nicaragua, 1992, *Propuesta del Gobierno de Nicaragua al FSLN para un Acuerdo Nacional. Resumen de Planteamientos en sesión del 14 de marzo de 1992*, Presidencia de la República, Managua, fotocopia.

- Goitia, Alfonso, 1991, "Reforma agraria con orientación de mercado", en Ruben van Oord 1991:167-193.
- Gordon, Sara, 1990, "Guatemala y El Salvador: Dos regímenes de exclusión", en *Polémica*, núm. 10, enero-abril, pp. 12-23.
- IGE, Iglesia Guatemalteca en el Exilio, 1989, *Guatemala: seguridad, desarrollo y democracia*, IGE, México.
- IICA/FLACSO, 1991, *Centroamérica en cifras*, IICA/FLACSO, San José.
- INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, 1989, *Nicaragua: Diez años en cifras*, INEC, Managua.
- INFORPRESS Centroamericana, 1988, *Los empresarios centroamericanos ante la crisis*, INFORPRESS Centroamericana, Guatemala.
- INIM, Instituto Nicaragüense de la Mujer, 1987, *Mujer y agroexportación en Nicaragua*, INIM, Managua.
- Jiménez, Edgar, 1986, "El Estado, la industrialización y la oligarquía en El Salvador", en *El Salvador: Estado oligárquico y desarrollo económico-social, 1945-1979*, CINAS, Cuaderno de Trabajo núm. 6, marzo, México.
- Jonas, Susan, 1988, "Elecciones de transición: Casos de Guatemala y Nicaragua", en *Polémica*, núm. 6, septiembre-diciembre, pp. 3-15.
- Jonas, Susan, 1991, *The Battle for Guatemala*, Westview Press, Boulder.
- Kruijt, Dirk, 1992, "Monopolios de filantropía: El caso de las llamadas 'Organizaciones no gubernamentales' en América Latina", en *Polémica*, núm. 16 (segunda época), enero-abril, pp. 41-47.
- La Feber, Walter, 1984, *Inevitable Revolutions. The United States in Central America*, Norton Co., Nueva York.
- Lake, Anthony, 1990, *After the Wars*, Transaction Books, Nueva Brunswick.
- La Ramee, Pierre y Erika Polakoff, 1990, "Transformation of the CDSS and the Breakdown of Grassroots Democracy in Revolutionary Nicaragua", en *New Political Science*, núm. 18/19, otoño-invierno, pp. 102-123.
- Lazo, José Francisco, 1990, "Pobreza, distribución del ingreso y necesidades de crecimiento real: El Salvador", en *El Salvador: Concertación y nuevo modelo económico*, CINAS, México, Cuaderno de Trabajo núm. 12, junio, pp. 69-103.
- Lungo, Mario, 1989, *El Salvador en los 80s: Guerra, elecciones, perspectivas*, CSUCA, San José.
- Marshall, Jonathan *et al.*, 1987, *The Iran-Contra Connection*, South End Press, Boston.
- Mason, T. David, 1986, "Land Reform and the Breakdown of Clientelist Politics in El Salvador", en *Comparative Politics*, núm. 18 (4), enero, pp. 487-516.
- Mc Clintock, Michael, 1985, *The American Connection*, Zed Books, Londres.

- Miles, Sara y Bob Ostertag, 1989, "FMLN New Thinking", en *NACLA Report on the Americas XXIII*, núm. 3, septiembre, pp. 15-38.
- Millman, Joel, 1990, "En El Salvador la corrupción no tiene rival, tras diez años de guerra", en *Excélsior*, 9 de julio, México.
- Montes, Segundo, 1988, *El Salvador 1988. Estructura de clases y comportamiento de las fuerzas sociales*, Universidad Centroamericana, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, San Salvador.
- Moreno Martín, Florentino, 1991, *Infancia y guerra en Centroamérica*, FLACSO, San José.
- Núñez Telles, Carlos, 1983, "Democracia: El camino que nos señala el pueblo", en Ricardo Sol (ed.), *El reto democrático en Centroamérica*, DEI, San José, pp. 157-188.
- Olivera, Mercedes et al., 1990, *Mujeres. Panorámica de su participación en Nicaragua*, Cuadernos de Cenzontle, Managua.
- Olivera, Mercedes y Anna María Fernández, 1992, *Subordinación de género en las organizaciones populares nicaragüenses*, Cuadernos de Cenzontle, Managua.
- Painter, James, 1987, *Guatemala: False Hope, False Freedom*, Latin American Bureau, Londres.
- Pérez Sainz, Juan Pablo y Rafael Menjívar Larín (coords.), 1991, *Informalidad urbana en Centroamérica. Entre la acumulación y la subsistencia*, Nueva Sociedad, Caracas.
- Prosterman, Roy y Jeffrey M. Riedinger, 1987, *Land Reform and Democratic Development*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- República de Costa Rica, Asamblea Legislativa, 1989a, *Informe de la Comisión sobre el narcotráfico*, UNED, San José.
- República de Costa Rica, Asamblea Legislativa, 1989b, *Segundo informe de la Comisión sobre el narcotráfico*, UNED, San José.
- Rosenthal, Gert, 1982, "Principales rasgos de la evolución de las economías centroamericanas desde la postguerra", en E. Torres-Rivas et al., *Centroamérica: Crisis y política internacional, Siglo XXI*, México, pp. 19-38.
- Ruben, Raúl y Govert van Oord (eds.), 1991, *Más allá del ajuste*, DEI, San José.
- Samandú, Luis E., 1991, "Estrategias evangélicas hacia la población indígena de Guatemala", en Luis E. Samandú (comp.), *Protestantismos y procesos sociales en Centroamérica*, EDUCA, San José, pp. 67-144.
- Schwarz, Benjamin C., 1991, *American Counterinsurgency Doctrine and El Salvador*, RAND Corporation, Santa Mónica.
- Scott, Peter Dale y Jonathan Marshall, 1991, *Cocaine Politics. Drugs, Armies and the CIA in Central America*, University of California Press, Berkeley.
- Serra, Luis, 1990, *El movimiento campesino. Su participación política durante la revolución sandinista, 1979-1989*, Universidad Centroamericana, Managua.

- Sevilla, Manuel, 1984, *Visión global de la concentración económica en El Salvador*, CINAS, Cuaderno de Trabajo núm. 3, diciembre, México.
- Sklar, Holly, 1988, *Washington's War on Nicaragua*, South End Press, Boston.
- Spalding, Rose J., 1991, *Capitalists and Revolution: State-Private Sector Relations in Revolutionary Nicaragua (1979-1990)*, LASA XVI International Congress, Washington D.C., abril, inédito.
- Stoll, David, 1991, "Evangelistas, guerrilleros y ejército: El triángulo Ixil bajo el poder de Ríos Montt", en Carmack, 1991:155-199.
- Tapia, Gabriel Gaspar, 1989a, "Crisis y politización empresarial en Centroamérica", en *Polémica*, núm. 8, mayo-agosto, pp. 24-34.
- Tapia, Gabriel Gaspar, 1989b, *El Salvador: El ascenso de la nueva derecha*, CINAS, México.
- Taylor, Lance et al., 1989, *Nicaragua. The Transition from Economic Chaos to Sustainable Growth*, Swedish International Development Agency, Estocolmo.
- Thomson, Marilyn, 1990, "Las organizaciones de mujeres en El Salvador", en *Estudios Sociales Centroamericanos*, núm. 54, septiembre-diciembre, pp. 119-135.
- Torres-Rivas, Edelberto, 1988, "Centroamérica: La transición autoritaria hacia la democracia", en *Polémica*, núm. 4, enero-abril, pp. 2-13.
- Torres-Rivas, Edelberto, 1991, "Imágenes, siluetas, formas, en las elecciones centroamericanas: Las lecciones de la década", en *Polémica*, núm. 14/15, mayo-diciembre, pp. 2-21.
- UNICEF/SEGEPLAN, 1991, *Análisis de la situación del niño y la mujer*, SEGEPLAN, agosto, Guatemala.
- Vargas, Óscar René, 1991, *Adónde va Nicaragua. Perspectivas de una revolución latinoamericana*, Ediciones Nicarao, Managua.
- Vilas, Carlos M., 1984, *La revolución sandinista*, Ediciones Legasa, Buenos Aires.
- Vilas, Carlos M., 1986, "El efecto de la transición revolucionaria en las clases populares: La clase obrera en la Revolución Sandinista", en *Cuadernos Políticos*, núm. 48, octubre-diciembre, pp. 92-114.
- Vilas, Carlos M., 1989a, *Transición desde el subdesarrollo*, Nueva Sociedad, Caracas.
- Vilas, Carlos M., 1989b, "Revolutionary Unevenness in Central America", en *New Left Review*, núm. 175, mayo/junio, pp. 111-125.
- Vilas, Carlos M., 1989c, *State, Class and Ethnicity in Nicaragua*, Lynne Rienner, Boulder.
- Vilas, Carlos M., 1990a, "Cambio y continuidad en la crisis Centramericana", en Marcos Roitman y Carlos Castro-Gil (coords.), *América Latina: Entre los mitos y la utopía*, Universidad Complutense, Madrid, pp. 119-146.
- Vilas, Carlos M., 1990b, "Nicaragua After the Elections: The First 100 Days", en *Z Magazine*, noviembre, pp. 91-97.

- Vilas, Carlos M., 1990c, "Nicaragua: El futuro de la contra", en *El Día Latinoamericano*, núm. 6, 2 de julio, p. 4.
- Vilas, Carlos M., 1991 "Nicaragua: A revolution that fell from the grace of the people", en Ralph Miliband (ed.), *The Socialist Register 1991*, Merlin Press, Londres, pp. 300-319.
- Vilas, Carlos M., 1992, "Family Affairs: Class, Lineage and Politics in Contemporary Nicaragua", en *Journal of Latin American Studies*, núm. 24/2, mayo, pp. 1-33.
- Vuskovic Céspedes, Pedro, 1991, "Los actores externos: Presencia y proyectos", en *Cuadernos de CRIES*, núm. 19/20, CRIES, Managua.
- Weinrub, Al y William Bollinger, 1987, *The AFL-CIO in Central America*, Labor Network on Central America, Oakland.